

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE DERECHO-MEXICALI**



**EL DERECHO DE AUDIENCIA DE LOS MEXICANOS: “ CASO AURELIA
NAVARRO, CORTE JUVENIL DEL CONDADO DE SANTA CLARA,
ESTADO DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ”.**

**TESIS
Que para obtener el grado de
MAESTRO EN DERECHO**

**Presenta:
Javier Armando Baylón Grecco**

**Directora;
Dra. María Candelaria Pelayo Torres**

DEDICATORIA

A MIS HIJAS

MARIANA, GABRIELA Y BÁRBARA

ÍNDICE

ÍNDICE

	Pag.
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES, NACIONALES ESTADOUNIDENSES APLICABLES AL CASO AURELIA NAVARRO.....	4
1.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL.....	5
1.1.- CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES.....	5
1.1.1.- APLICACIÓN DEL ARTICULO 36 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN CONSULAR.....	7
1.1.2.- APLICACIÓN DEL ARTICULO 38 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO RECEPTOR.....	8
2.- MARCO JURÍDICO NACIONAL.....	11
2.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.....	12
2.2.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.....	12
2.3.- LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.....	17
3.- MARCO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE.....	19
3.1.- CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.....	20

3.2.- CALIFORNIA JUVENILE LAWS AND RULES.....	24
3.3.- WELFARE AND INSTITUTIONS CODE.....	24
3.4.- CALIFORNIA CONSTITUTION.....	27
3.5.- FAMILY CODE.....	27
3.6.- PENAL CODE.....	28
3.7.- OFFICE OF THE DISTRICT ATTORNEY.....	29
3.8.- OFFICE OF THE PUBLIC DEFENDER.....	30
3.9.- SOCIAL SERVICES AGENCY.....	32
3.10.- JUVENILE DEPENDENCY PROCESS.....	35

CAPÍTULO SEGUNDO

CASO AURELIA NAVARRO PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD.....	45
--	----

CONCLUSIONES	62
---------------------------	----

ANEXOS	65
---------------------	----

ANEXO 1. AURELIA N. PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI TO THE CHIEF JUSTICE OF THE UNITED STATES OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES.....	66
---	----

ANEXO 2. CARTA DE MANUEL TELLO, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES. MEXICO.....	102
--	-----

ANEXO 3. CARTA DE THOMAS J. SPIELBAUER DEPUTY PUBLIC DEFENDER, COUNTY OF SANTA CLARA, SAN JOSE , CA., EUA.....	104
---	-----

ANEXO 4. OFICIO DEL ASSOCIATE CHIEF OF PROTOCOL OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE WASHINGTON, D.C.....	107
--	-----

ANEXO 5. CORREOGRAMA NO. 003357, DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDO POR LA EMBAJADA DE MEXICO, RECONOCIENDO AL LIC. JAVIER ARMANDO BAYLÓN GRECCO, COMO CONSUL EN SAN JOSE CALIFORNIA.....	109
FUENTES DE INFORMACIÓN.....	111

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación está basado en hechos reales en los cuales padres mexicanos han sido sujetos de juicio de pérdida de patria potestad en territorio norteamericano, específicamente en el Condado de Santa Clara, estado de California E.U.A. en el que se aplicaron las leyes de ese estado.

Dichos procedimientos fueron realizados al margen de instrumentos de derecho internacional como es la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares que regula los derechos de los extranjeros en cualquier país del mundo y que todas las autoridades del estado receptor (entendiéndose este, como el país en el que, el conacional es considerado como extranjero y se encuentra físicamente). Asimismo se violaron también disposiciones jurídicas de derecho interno estadounidense.

Esta tesis de maestría reviste interés especial porque en este caso se encontraron en juego derechos de mexicanos en el extranjero, tanto de padres como de hijos menores de edad, quienes por su propia calidad no pudieron defenderse en juicio, ni saber las circunstancias por las cuales los menores fueron separados del seno familiar en virtud de que sus padres se vieron involucrados en conflictos legales con autoridades norteamericanas, provocando con esto la desintegración familiar, la pérdida de la patria potestad y como resultado final la adopción de menores mexicanos por familias norteamericanas.

El conocimiento de este caso como de otros similares se debió a la oportunidad que tuve de participar como Cónsul de Protección del Consulado Mexicano en la ciudad de San José, California, lo que me permitió conocer a fondo el

procedimiento aplicable a este tipo de juicios en las Cortes Juveniles de los diversos Condados a los cuales estábamos asignados.

Por consecuencia en el presente trabajo de investigación analizaremos las diversas disposiciones jurídicas aplicables al caso, como son las de índole internacional, nacional y norteamericanas, así como también el procedimiento de pérdida de patria potestad que se le siguió a AURELIA NAVARRO.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y
AMERICANAS APLICABLES AL CASO AURELIA NAVARRO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y AMERICANAS APLICABLES AL CASO AURELIA NAVARRO

1.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

Con el propósito de entender el presente caso es necesario que analicemos las disposiciones jurídicas aplicables. Empezaremos con las de índole internacional como son:

1.1.- CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES

Esta Convención fue elaborada en la ciudad de Viena, Austria el 24 de abril de 1963, firmada por el representante de México el 7 de octubre de 1963, aprobada por el Senado de la República el 24 de diciembre de 1964 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1965, entró en vigor el 19 de marzo de 1967 en general para los países signantes.

Su objetivo principal es regular las relaciones consulares entre los pueblos, estableciendo la igualdad soberana de los estados, el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, otorgando privilegios e inmunidades a los agentes consulares para el ejercicio de sus funciones en el ámbito internacional.

Su artículo quinto establecen las funciones consulares las cuales consisten en:

-- Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. (Inciso a)

-- Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas. (Inciso e)

-- Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela.(Inciso h)

-- Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y procedimientos en vigor en éste último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente. (Inciso i)

-- Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor. (Inciso j)

-- *Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se opongan, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.*⁽¹⁾ *(Inciso m)*

1.1.1.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN CONSULAR

Uno de los artículos más importantes de esta Convención que debería ser el más socorrido por nuestros conacionales en el extranjero específicamente en los Estados Unidos de América, es el artículo 36 que establece lo siguiente:

Comunicación con los nacionales del Estado que envía.

1.- Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) Los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos.

b) ***Si el interesado lo solicita,*** las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, será así mismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.

c) Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir a favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello. ⁽²⁾

1.1.2.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO RECEPTOR

El artículo 38 establece la comunicación con las autoridades del Estado receptor.

Los funcionarios consulares podrán dirigirse en el ejercicio de sus funciones.

- a) *A las autoridades locales competentes de su circunscripción consular.*
- b) *A las autoridades centrales competentes del Estado receptor, siempre que sea posible y en la medida que lo permitan sus leyes, reglamentos y usos y los acuerdos internacionales correspondientes.* ⁽³⁾

Es importante el análisis de estos preceptos toda vez que en ellos se detallan las actividades primordiales a través de las cuales los agentes diplomáticos y consulares ejercen sus funciones en las diferentes sedes y misiones en todo el mundo. En el caso que nos ocupa, fueron éstas las disposiciones jurídicas internacionales aplicables para poder representar los intereses de AURELIA NAVARRO ante la Corte Juvenil del Condado de Santa Clara en fecha 30 de junio de 1993. No obstante, desconociendo dichos ordenamientos internacionales, el Juez que conoció el caso negó la personalidad y legitimación del Cónsul de México ante la Corte, lo que dió como consecuencia que el abogado defensor público de AURELIA con fecha 2 de julio de 1993 presentara una apelación contra dicha orden judicial ante la CORTE DE APELACIONES (CALIFORNIA COURT OF APPEAL). Se argumentó la violación a lo establecido por la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, respecto a los preceptos antes mencionados, dictándose auto de admisión y ordenando al Aquo que se diera participación al Cónsul como representante de una Nación Soberana y defendiendo los intereses y derechos de un conacional en el proceso de pérdida de patria potestad seguida en contra de AURELIA NAVARRO.

Con fundamento en lo establecido en la Convención antes mencionada, así como en lo señalado en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se sustenta la posición del Poder Ejecutivo Federal en cuanto a su política exterior, del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que señala las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a impartir protección a los mexicanos en el extranjero, del artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que establece la protección de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones fue que incursioné en dicho proceso judicial en fecha 27 de julio de 1993.

Lamentablemente nuestros conacionales desconocen estos preceptos de índole internacional que en un momento dado pueden hacer valer, lo que da lugar a que las autoridades del Estado receptor violen de manera reiterada sus derechos. Algunas veces por alguna acción y en otras por omisión.

Por tal motivo considero que el gobierno federal en todo el país e incluso en el extranjero, donde también se encuentren nuestros conacionales debería llevar a cabo campañas publicitarias en los medios electrónicos e impresos de comunicación apoyados por las diferentes agrupaciones sociales, políticas y religiosas haciendo del conocimiento de los derechos que tienen al ingresar a otro país y que en caso de ser detenidos o arrestados pueden solicitar la asistencia

diplomática o consular de su país, independientemente de si su ingreso es legal o ilegal.

Asimismo la preparación profesional y experiencia de nuestros representantes diplomáticos y consulares en el extranjero debe ser de un conocimiento pleno del servicio que van a prestar en el Estado receptor. El aprendizaje de sus costumbres, idiosincrasia, sistema jurídico, lenguaje, autoridades y funciones; así como también de la plena identificación y atención con las comunidades mexicanas en el extranjero, permitirá tener contacto permanente y estarán en posibilidad de obtener información expedita respecto de la problemática en que se vean involucradas las comunidades mexicanas en las diversas localidades.

También se debe considerar de suma importancia la relación que guarden con las autoridades del Estado receptor, toda vez que son con ellas con quienes tratarán los asuntos relacionados con nuestros conacionales, de tal forma que es necesario que tengan conocimiento en los temas a tratar, para lo cual se pueden asesorar de profesionistas del Estado receptor.

2.- MARCO JURÍDICO NACIONAL

En el derecho interno mexicano, el fundamento jurídico en el que se basa el ejercicio de la política exterior y la designación de agentes diplomáticos está consagrado en primer lugar en la Constitución.

2.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Carta Magna en su artículo 89 establece las facultades y obligaciones del Presidente de la República:

II.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, remover a los Agentes Diplomáticos y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no este determinado de otro modo en la Constitución o en las Leyes;

III.- Nombrar los Ministros, Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales, con aprobación del Senado.

X.- Dirigir la Política Exterior y celebrar Tratados Internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacional.⁽⁴⁾

2.2.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Con el objeto de establecer la organización, estructura y funcionamiento de la actividad de la política exterior mexicana, la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL establece las bases en las que el Poder Ejecutivo desarrolla sus actividades, mismas que están previstas en los artículos que a continuación se mencionan:

ARTÍCULO 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

ARTÍCULO 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

I.- Secretarías de Estado;

II.- Departamentos Administrativos, y

III.- Consejería Jurídica.

ARTÍCULO 7.- El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado, Jefes de Departamentos Administrativos y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República.

ARTÍCULO 9.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 10.- Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.

ARTÍCULO 11.- Los titulares de las Secretarías de Estado y de los Departamentos Administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.

ARTÍCULO 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, Oficina, Sección y Mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la Política Exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de Tratados, Acuerdos y Convenciones en los que el País sea parte;

II.- Dirigir el Servicio Exterior en sus aspectos Diplomático y Consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de registro civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus Embajadas y Consulados.

II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, para que puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior.

III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los Organismos e Institutos Internacionales de que el Gobierno Mexicano forme parte;

IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del País y aguas internacionales;

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de estas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos;

VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;

VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización;

VIII.- Guardar y usar el gran sello de la Nación;

IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos;

X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República;

XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme a la Ley o Tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo exámen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o

improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y

XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. ⁽⁵⁾

2.3.- LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El ordenamiento jurídico que regula específicamente las actividades a realizar por los miembros del servicio diplomático y consular en el extranjero es la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la cual prevee:

ARTÍCULO 1.- El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la Política Exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo sucesivo denominada la Secretaría, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de Política Exterior que señale el Presidente de la República, de conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución.

ARTÍCULO 2.- Corresponde al Servicio Exterior Mexicano:

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados Extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México;

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

III. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del estado;

IV. Intervenir en la celebración de Tratados;

V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de las obligaciones internacionales que correspondan;

VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;

VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, al mejoramiento de las relaciones entre los estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en primer término los intereses nacionales;

VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional; y,

X. Las demás funciones que señalen al servicio exterior esta y otras leyes y reglamentos, así como los tratados de los que México sea parte.

ARTÍCULO 3.- El Servicio Exterior Mexicano se integra por personal de carrera, personal temporal y personal asimilado.

ARTÍCULO 4.- El personal de carrera será permanente y comprende la rama diplomático-consular y la rama técnico-administrativa. Su desempeño se basa en los principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, a fin de establecer un servicio permanente para la ejecución de la política exterior de México.⁽⁶⁾

3.- MARCO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE

Una vez que se transcribieron las diversas disposiciones jurídicas de índole internacional y nacional que fundamentan el ejercicio de las funciones de los representantes diplomáticos en general y en especial los mexicanos para defender los intereses de sus conacionales ante autoridades del Estado receptor donde prestan sus servicios. A continuación analizaremos las normas jurídicas de los

Estados Unidos de América que sirvieron de base legal y sustento para llevar a cabo el juicio de AURELIA NAVARRO.

3.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ARTÍCULO DOS

Segunda Sección

1. El Presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos Estados cuando se la llame al servicio activo de los Estados Unidos; podrá solicitar la opinión por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos con relación a cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos empleos, y estará facultado para suspender la ejecución de las sentencias y para conceder indultos tratándose de delitos contra los Estados Unidos, excepto en los casos de acusación por responsabilidades oficiales.

2. Tendrá facultad, con el consejo y consentimiento del Senado, para celebrar tratados, con tal de que den su anuencia dos tercios de los senadores presentes, y propondrá con el consentimiento del Senado, nombrará a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules, los magistrados del Tribunal Supremo y a todos los demás funcionarios de los Estados Unidos a cuya designación no provea este documento en otra forma y

que hayan sido establecidos por ley. Pero el Congreso podrá atribuir el nombramiento de los funcionarios inferiores que considere convenientes, por medio de una ley, al Presidente solo, a los tribunales judiciales o a los jefes de los departamentos.

ARTÍCULO TRES

Primera Sección

1. Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo.

Segunda Sección.

1. El Poder Judicial conocerá en todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; en todas las controversias que se relacionen con embajadores, otros ministros públicos y cónsules; en todas las controversias de la jurisdicción de almirantazgo y marítima; en las controversias en que sean parte los Estados Unidos; en las controversias entre dos o más Estados,

entre un Estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de Estados diferentes, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo, ciudadanos o súbditos extranjeros.

3. Todos los delitos serán juzgados por medio de un jurado excepto en los casos de acusación por responsabilidades oficiales, y el juicio de que se habla tendrá lugar en el Estado en que el delito se haya cometido; pero cuando no se haya cometido dentro de los límites de ningún Estado, el juicio se celebrará en el lugar o lugares que el Congreso haya dispuesto por medio de una ley.

ARTÍCULO SEIS

2. Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado.

ENMIENDA V

Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia

nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.

ENMIENDA VI

En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda.

ENMIENDA XIV

1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los

Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos. ⁽⁷⁾

3.2.- LEYES JUVENILES Y REGLAS DE CALIFORNIA

(CALIFORNIA JUVENILE LAWS AND RULES)

Es una publicación anual en la cual se compendian las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades realizadas por las Cortes Juveniles en el Estado de California, tales como el Código de Instituciones y Bienestar (Welfare and Institutions Code), Constitución de California (California Constitution), Código Familiar (Family Code), Código Penal (Penal Code), mismos que a continuación reseñaremos. ⁽⁸⁾

3.3.- CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y BIENESTAR

(WELFARE AND INSTITUTIONS CODE)

Este Código de Instituciones y Bienestar tiene por objeto establecer programas y servicios orientados a proteger, apoyar y cuidar a los niños, otorgar servicios de protección de manera completa y ordenada por las Cortes Juveniles u otra Agencia Pública designada por la Junta de Supervisores para realizar las

funciones prescritas por el Código, con la finalidad de garantizar la seguridad física, moral y psicológica del menor y que estos no sean violados o amenazados por ninguna circunstancia.

Dentro de las prevenciones generales del Servicio Social Público su finalidad es la de otorgar al público en general, dentro de los recursos oficiales asignados, apoyo razonable y atención a todas aquellas familias o personas que requieran de este servicio.

Así como la de proveer en tiempo el servicio apropiado al desarrollo de las personas en lo individual o la de realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener y otorgar los cuidados y apoyos necesarios para su manutención.

También se incluye la de otorgar servicios sociales y de protección a los discapacitados o personas en estado de interdicción o con alguna incapacidad legal, asimismo a los menores u otras personas sujetos a explotación o las que se encuentren en peligro su salud en el presente o en el futuro y que esto impida un desarrollo normal de sus capacidades para su independencia.

En el capítulo de las leyes que rigen a la Corte Juvenil para Menores, artículo 202, tenemos como propósito los de proteger la seguridad del público y de los menores que se encuentren bajo la jurisdicción de una Corte Juvenil, preservar y fortalecer la unidad y lazos familiares del menor, removiendo solamente al menor en los casos en que sea para su mejor interés y protección.

Cuando se lleve a cabo la remoción de un menor del seno familiar, la Corte Juvenil deberá realizar y otorgar los servicios de reunificación con su padre o madre según sea el caso, siendo esto una actividad prioritaria.

Los menores que se encuentren bajo la jurisdicción de la Corte Juvenil y que requieran de servicios de protección deberán de recibir cuidado, tratamiento y asistencia destinados a obtener el mejor beneficio y el mejor interés del menor.

Dentro de la competencia de la Corte Juvenil y de acuerdo con las facultades que la ley le otorga tiene la facultad de acordar y ordenar a los padres, padre o madre, tutores, o custodios provisionales de los menores que se encuentren sujetos a un juicio familiar, realizar todos aquellos actos, programas u ordenes que sean necesarios y propios para el mejor interés del menor, de su desarrollo y rehabilitación. Estas órdenes consistirán en cuidar, supervisar, custodiar, conducir, mantener y apoyar al menor incluyendo tanto el tratamiento educativo y médico correspondiente.

En el capítulo de Servicios Sociales, artículos 17200, 17204 y 17206, se establece que las disposiciones legales de este Código intentan preservar y fortalecer los lazos familiares de los menores de la mejor manera posible, que en los casos en que se revoque la custodia de un menor ya sea de los padres, la madre o el padre, tendrán preferencia los familiares para quedarse con la custodia del menor como hogar sustituto, basado en el Código de Familia.

3.4.- CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA

(CALIFORNIA CONSTITUTION)

En la Constitución del Estado de California, artículo 7, se establece la garantía de audiencia, correspondiente a que ninguno podrá ser detenido o molestado, sino a través de una orden judicial y auspiciado por un debido proceso.

Manifestando además que en todo proceso penal los indiciados tendrán derecho a ser representados en la Corte por un abogado, donde se les haga saber la acusación, el acusador y el delito que se le imputa y en el caso que el acusado no entienda inglés tiene el derecho de ser asistido por un traductor durante el proceso.⁽⁹⁾

3.5.- CÓDIGO FAMILIAR

(FAMILY CODE)

El Código de Familia del estado de California en el capítulo de Custodia de Menores y en las provisiones generales, artículos 3010 y 3011, establecen cuáles son las consideraciones para determinar el mejor interés del menor.

Para tal efecto la Corte deberá de tomar en cuenta dentro del procedimiento los siguientes factores a considerar.

La seguridad, la salud y el bienestar del menor.

Como un requisito que la Corte exige para alegar abuso del menor, es necesario que se corrobore de manera independiente e incluyente y no limitativa por escrito, informes de cuerpos de seguridad, Agencias de Servicios Sociales, de Protección de Menores, de Bienestar Social, Cortes, de Salud; o cualquier otra agencia pública o privada u organismo no gubernamental.⁽¹⁰⁾

Asimismo y en los casos en los cuales se ventilen juicios de custodia de menores en los que alguna de las partes no hable inglés, la Corte a su costa, designará un intérprete durante el procedimiento.

3.6.- CÓDIGO PENAL

(PENAL CODE)

El Código Penal del estado de California en su artículo 11165.2, tipifica el delito de Negligencia, de la siguiente manera:

Negligencia significa el trato o el maltrato negligente o el descuido ocasionado a un menor por parte de la persona o personas responsables o encargadas del cuidado y bienestar de los niños, bajo circunstancias que provoquen daño o que le pudieran ocasionar a su salud o bienestar. En dicha definición se incluye tanto la actuación como la omisión de la persona encargada del cuidado del menor.

Severa negligencia son aquellos casos o situaciones en que las personas encargadas del cuidado o custodia de un menor provoquen, causen, permitan o pongan a un menor en alguna situación que peligre su salud o integridad física,

incluyendo también el descuido imprudencial de proveerle alimentación, vestimenta, habitación, servicio médico. ⁽¹¹⁾

El mismo ordenamiento legal establece que es obligación de todo ciudadano informar sobre el abuso o negligencia contra un menor.

Todo individuo o profesional cuyo trabajo lo ponga en contacto con menores de edad, está obligado por ley a proveer información sobre cualquier sospecha de abuso o negligencia. Si la información es comunicada vía telefónica se turna a la Agencia de Servicios Sociales del Condado para su trámite correspondiente.

Entre los profesionales a quienes la ley obliga a informar sobre estos delitos se encuentran los miembros de los cuerpos de seguridad pública, las instituciones de salud, el sector educativo, el sector social.

El proveer información sobre los delitos mencionados con antelación, no perjudica ni pone en peligro de acción legal al informante, toda vez que los nombres permanecerán en el anonimato.

3.7.- OFICINA DEL FISCAL DE DISTRITO

(OFFICE OF THE DISTRICT ATTORNEY)

La Oficina del Fiscal de Distrito está encargada de llevar a cabo la persecución de delitos y representar los intereses de los habitantes en el Condado de Santa Clara, asimismo dentro de sus funciones y organigrama cuenta con la Unidad de

Dependencia Juvenil que es la responsable de asesorar y representar a los menores que son víctimas de maltrato, abuso o descuido por parte de los padres o quienes estén encargados de su cuidado.⁽¹²⁾

Su participación inicia a partir de que el caso es turnado a la Corte de Dependencia Juvenil, fundado en lo establecido por la petición hecha en el Código de Bienestar e Instituciones.

En estos supuestos los menores siempre son representados por el Fiscal de Distrito y su finalidad consiste en hacer saber al Juez qué es lo que quieren los menores, sin embargo, en los casos en que estos sean muy pequeños para hablar, siempre buscarán el mejor interés del menor.

También les corresponde supervisar a los menores que representan en los albergues u hogares sustitutos provisionales que son depositados bajo custodia, así como también que concurren a las escuelas y que reciban los servicios sociales apropiados.

3.8.- OFICINA DEL DEFENSOR PÚBLICO

(OFFICE OF THE PUBLIC DEFENDER)

Su misión consiste en otorgar una adecuada defensa legal a las personas que no tengan capacidad económica para contratar un abogado, fundamentado en la Constitución Federal, Local y disposiciones de la Corte.⁽¹³⁾

Tiene también como objetivos el de tomar los casos en los que los solicitantes califiquen para su servicio, coordinándose con las demás agencias gubernamentales para solicitar información y recibirla respecto a los casos que se ventilan.

Así pues su participación es sumamente importante ya que la mayoría de los conacionales que se ven involucrados en casos relacionados con juicios de pérdida de patria potestad o de adopción, carecen de dinero para contratar los servicios de abogados particulares que los representen por los altos costos de honorarios que cobran y por consecuencia se requería de los servicios de estos profesionistas, quiénes verdaderamente en la Corte realizan un trabajo altamente profesional, sin distinción de nacionalidad, raza, cultura o religión. Mencionando también que en coordinación con funcionarios del Consulado Mexicano se establecieron programas de defensa legal en beneficio de nuestros paisanos durante el tiempo en que estuvimos en funciones, logrando con esto en varios casos la segura repatriación de mexicanos a nuestro país, la asistencia legal expedita y la comunicación directa con autoridades norteamericanas de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de solucionar los diversos casos legales que se les presentaban.

3.9.- AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

(SOCIAL SERVICES AGENCY)

La actividad desarrollada por las Agencias de Servicios Sociales en los Estados Unidos de América y especialmente en el estado de California datan de los años de 1960, cuando las normas jurídicas aplicables a la protección y bienestar de la familia y especialmente de los menores empezó a evolucionar.

De tal manera que se estableció un vínculo entre el gobierno, sociedad y los organismos no gubernamentales para fomentar el servicio y los programas de bienestar del menor tales como los de prevención, apoyo legal, social y médico, mismos que hasta la fecha están dando resultados.

Con el paso del tiempo y en la actualidad los Trabajadores Sociales de las diversas Agencias Sociales tienen un gran poder basados en las facultades que les confiere el Código de Instituciones y Bienestar para el ejercicio de sus funciones. ⁽¹⁴⁾

De tal manera que las políticas aplicables a la protección de menores han sido más detalladas en su conjunto, estableciendo un mínimo de beneficios, planes y condiciones a favor de la niñez.

La Agencia de Servicios Sociales para su mejor desempeño está integrada por varios departamentos. En el caso que nos ocupa analizaremos el DEPARTAMENTO DE FAMILIA Y SERVICIOS A LOS MENORES, (DEPARTMENT OF FAMILY AND CHILDREN SERVICES), cuya función primordial es proteger a los menores de abuso o negligencia, promover el

desarrollo y salud, proveer servicios a la familia con la finalidad de estrechar los lazos de cuidado con los menores. El Departamento es responsable de intervenir, prevenir, alegar, educar y proteger a los niños y atender sus necesidades para su desarrollo y manutención. ⁽¹⁵⁾

Como metas tiene las siguientes:

- 1.- SEGURIDAD DEL MENOR: Proteger a los menores a quienes se les cause un daño, prevenir riesgos de negligencia o abuso y reducir el riesgo para su seguridad.
- 2.- FUNCIONAMIENTO DEL MENOR: Establecer un mínimo de atención al menor en los rubros de alimentación, vestido, alojamiento, salud, educación.
- 3.- FUNCIONAMIENTO DE LA FAMILIA: Mejorar la participación de los padres y familias en cuanto al cuidado de los menores con apoyo de las agencias de servicio social.
- 4.- CONTINUIDAD FAMILIAR: Promover lo humanamente posible la unidad familiar en un corto plazo a través de la reunificación familiar, según sea el caso.

El Departamento tiene como servicios los siguientes:

- 1.- EN LA CORTE: La participación de los trabajadores sociales adscritos a este Departamento es muy importante, toda vez que trabajan de manera muy cercana con las Cortes Juveniles, con el Fiscal de Distrito, con Abogados y con Agencias que se encargan de velar por los intereses de los menores.

La función primordial de los trabajadores sociales es la de investigar casos de negligencia o abuso de menores y en su oportunidad, determinar y solicitar a la Corte si los menores afectados pueden regresar sin peligro a su hogar o en su defecto conseguirles un hogar sustituto.

2.- EN EL CAMPO:

También les corresponde supervisar el comportamiento de los padres o quienes ejerzan la patria potestad respecto a la relación que guarden con el menor, de tal manera que en su oportunidad recomendarán al Juez los programas sociales a desarrollar para el mejor interés del menor.

3.- INVESTIGACIÓN DE DEPENDENCIA:

Los trabajadores sociales están encargados de llevar a cabo las investigaciones en los casos que tengan conocimiento de negligencia o abuso de menor, a partir de tal momento y cuando ponen a disposición y custodia preventiva al menor en algún albergue infantil provisional, tienen la obligación dentro de las siguientes 48 horas de encontrar a algún familiar y entregarlo. En su defecto lo ponen a disposición de la Corte Juvenil e inician el juicio de custodia, en su oportunidad de pérdida de patria potestad y posteriormente adopción, esto basado en las disposiciones jurídicas mencionadas con antelación en este capítulo.

Asimismo tienen la responsabilidad de supervisar y monitorear el desenvolvimiento y comportamiento del menor durante el proceso judicial, esto con la finalidad de determinar y recomendar si el menor es apto para regresar a su casa o en su defecto designarle un hogar sustituto.

3.10.- PROCESO DE DEPENDENCIA JUVENIL

(JUVENILE DEPENDENCY PROCESS)

Los trabajadores sociales de las diversas Agencias tienen la facultad legal de participar en procesos. Pueden participar presentando testimonio y evidencia sobre el caso de que un menor haya sido abusado o que fué sujeto a trato negligente.

Su participación en el juicio será con la finalidad de informar al Juez y recomendar de ser posible que el menor regrese a su casa con sus padres a través de la reunificación, o en su defecto solicitar la pérdida de la patria potestad y promover juicio de adopción. ⁽¹⁶⁾

Los trabajadores sociales son asistidos en las audiencias por Abogados adscritos a sus Agencias Sociales, quienes los asesoran en relación a las preguntas que se deben formular y las pruebas por presentar en la Corte.

Los trabajadores sociales deberán demostrar que los servicios otorgados en beneficio del menor son los correctos y óptimos, basados en las circunstancias de los hechos de cada caso, circunstancias, métodos, entrevistas, observaciones e interacción con los padres, psicólogos, médicos, cuerpos de seguridad y otras Agencias.

También deberán de monitorear el progreso que desarrollen sus clientes en la solución del problema, el éxito de este trabajo consiste en mantener actualizado el trabajo social del menor de manera permanente, ya que alguna negativa o

negligencia de los padres podrá motivar que el trabajador solicite la pérdida de patria potestad y en su oportunidad la adopción.

Con el objeto de ejemplificar el procedimiento de dependencia juvenil seguido en las Cortes Juveniles del Estado de California, a continuación anexamos el flujograma en el que se desarrollan y establecen las acciones, términos y acuerdos que emite la autoridad jurisdiccional sobre el caso.

JUVENILE DEPENDENCY PROCESS

Emergency Response



Intake Investigation



48 HOURS

Initial Hearing

Prima Facie Hearing

15 DAYS

Jurisdictional Hearing

Petition Dismissed Petition Sustained

10 DAYS

Dispositional Hearing

Child at Home Child Removed

Reunification	Permanency Planning
---------------	---------------------

6 Month Review Hearing ★1

Remain Home	Return Home	Remain in Foster Care w/ Reunification	Remain in Foster Care w/o Reunification
-------------	-------------	--	---

12 Month Hearing

Remain Home	Return Home	Remain in Foster Care w/ Reunification	Remain in Foster Care w/o Reunification
-------------	-------------	--	---

15 Month Hearing ★2

Remain at Home	Return Home	Remain in Foster Care w/o Reunification
----------------	-------------	---

366.26 - Hearing ★3 Selection & Implementation

120 days from the Order Terminating Reunification Services

Long Term Foster Care	Guardianship	Adoption
-----------------------	--------------	----------

Post-Permanency Planning Hearing

Monitor Placement Plan

¿QUÉ ES LA CORTE DE DEPENDENCIA JUVENIL?

Es la Corte encargada de la seguridad y protección de los niños. Escucha casos donde se alega que los niños han sido abusados o descuidados. La Corte determina si el niño puede vivir seguro con sus padres o si debe de ser puesto al cuidado de otros.⁽¹⁷⁾

La Corte está interesada únicamente en la protección de los niños y en ayudar a las familias con los problemas que las trajeron a ella. La Corte no tiene la competencia de determinar la culpabilidad criminal o de castigar a los padres.

Todos los procedimientos de la Corte son confidenciales y las audiencias no están abiertas al público.

¿QUÉ ES UNA PETICIÓN?

Es un documento legal ofrecido por el trabajador social pidiendo a la Corte que haga al niño dependiente de la Corte Juvenil, presentándose al menor dentro de las primeras 48 horas en que el niño ha sido puesto en custodia protectora.

La petición contiene pretensiones hechas por el DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LOS MENORES, respecto de la necesidad de que la Corte tome responsabilidad por la seguridad y protección del niño.

Al preparar la petición de dependencia, el Trabajador Social hablará con los padres, el niño, familiares si los hay, amigos, vecinos, personal médico, escolar, o cualquier persona que pueda tener información respecto a la seguridad del niño.

Una vez hecha la investigación correspondiente el Trabajador Social elaborará un reporte en el que tendrá las recomendaciones pertinentes al caso, el cual con posterioridad someterá a consideración de la Corte correspondiente. ⁽¹⁸⁾

¿QUÉ SUCEDE EN LA CORTE?

Hay varios tipos de audiencias en la Corte, mismas que se señalan a continuación. ⁽¹⁹⁾

AUDIENCIA DE DETENCIÓN

Si un niño ha sido puesto en custodia protectora una audiencia de detención tendrá verificativo dentro de los 3 días hábiles siguientes.

En la audiencia el Juez considerará los siguientes puntos:

- 1.- Si el menor está fuera de peligro al regresar a su casa.
- 2.- Si el menor está mejor bajo el cuidado de un familiar dispuesto a cuidarlo.
- 3.- Si debe de permanecer bajo el cuidado de otra persona en un albergue u hogar provisional.

AUDIENCIA JURISDICCIONAL

Esta audiencia tendrá lugar dentro de los 15 días de la fecha en que la petición fue presentada.

En esta audiencia quienes ejercen la patria potestad, custodia o cuidado del menor expresan si están de acuerdo o no con las acusaciones formuladas en la petición.

Si el Juez encuentra suficiente evidencia y pruebas y determina que la petición está bien formulada en relación a los hechos y fundamentación legal, dictará acuerdo señalando fecha para la audiencia de deposición.

AUDIENCIA DE DEPOSICIÓN

Ésta tendrá verificativo dentro de 10 días hábiles de la audiencia jurisdiccional.

Aquí la Corte revisará las recomendaciones específicas y un plan de servicio propuesto por el Trabajador Social.

Este plan será discutido por las partes del proceso y sus abogados buscando siempre el mejor interés del menor incluyendo acciones precisas en que las partes acuerden y acepten para resolver el problema y proveer un hogar seguro para el menor.

En esta audiencia la Corte puede emitir los siguientes acuerdos:

- 1.- Entregar al niño a sus padres y que el Departamento de Servicios para la Familia y Menores supervise informalmente el caso durante 6 meses.
- 2.- Declarar que el niño sea dependiente de la Corte entregando al niño a los padres o a un Trabajador Social para que provea de los servicios de asistencia social para garantizar la seguridad del niño en su hogar.

3.- Declarar que el niño sea dependiente de la Corte y ordenar su ubicación con uno de los que ejerzan la patria potestad, algún familiar o en un hogar provisional.

4.- Establecer restricciones con respecto a las visitas del menor, ordenando a los padres que participen en programas o clases de educación u otros programas acordes a la familia.

5.- Cerrar el caso y emitir sentencia.

CONFERENCIA Y JUICIO

Un juicio puede ser solicitado por quien ejerza la patria potestad si no está de acuerdo con la petición o las recomendaciones del Trabajador Social, asimismo puede solicitar su inicio el Departamento de Familia y Servicios a los menores.

Si el caso está listo para juicio una conferencia de conciliación será fijada primero: esta es una oportunidad para que todas las partes involucradas se reúnan y discutan los hechos del caso y busquen una solución conveniente para todos.

De ser posible llegar a un arreglo, en esta conferencia se emite un acuerdo el cual se somete a consideración de la Corte para su revisión y aprobación.

De lo contrario se procede al juicio, momento en el cual la Corte decidirá si las acusaciones son verdaderas o no.

Cada parte presentará sus testigos, la Corte analizará los hechos y pruebas y resolverá conforme a derecho.

Si la Corte encuentra que la petición es infundada ordenará que el menor regrese a su casa, en caso contrario el Juez ordenará la celebración de una audiencia de jurisdicción.

De acuerdo al desarrollo del procedimiento después de 6 meses se llevará a cabo una primera audiencia de revisión del caso, posteriormente una segunda a los 12 meses en donde procede la reunificación familiar, la continuación de la custodia provisional en otro domicilio y una tercera y última a los 15 meses en la que el Juez determinará sobre la revocación de la patria potestad, el otorgamiento de custodia del menor definitiva y posteriormente juicio de adopción.

- (1) Convención de Viena sobre Relaciones Consulares [en línea]. 24 de abril de 1963, p. 5. http://spin.com.mx/~dhjoseph/docum/viena_e.html [consulta: 4 de junio del 2004]
- (2) Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. op. cit. p.16
- (3) Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. op. cit. p.17
- (4) Const. Pol. Mex. Art. 89. f. 2, 3, 10.
- (5) Ley Org. Admón. Púb. Federal. Art. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 26, 28 f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- (6) Ley Serv. Ext. Mex. Art. 1, 2, 3, 4,.
- (7) Const. EUA. Art. 2, 3, 6.
- (8) Código de Instituciones y Bienestar de California. EUA. Art. 19
- (9) Const. Calif. EUA. Art. 7
- (10) Código Familiar Calif. EUA. Art. 3011.
- (11) Código Penal Calif. EUA. Art. 11165
- (12) Ofna. Fiscal Dist. Calif. EUA. [en línea]. 5 de marzo de 1970, p. 1. <http://www.jimbeall.org/links/links.html> [consulta: 4 de junio de 2004].
- (13) Ofna. Def. Pub. Calif. EUA. [en línea]. 5 de marzo de 1970, p. 1. <http://www.jimbeall.org/links/links.html> [consulta: 4 de junio de 2004].
- (14) Stein, Theodore J. Child Welfare and the Law, 2ª. Ed. Washington, D.C. CWLA Press, 1998, p. 19
- (15) Dept. de Familia y Servicio a los Menores, Calif. EUA [en línea]. 2 de agosto de 1986, p. 1. <http://www.santaclaracounty.org/ss/dfcs/index.html> [consulta: 4 de junio de 2004].

(16) Agencia de Servicios Sociales. Guía para los Padres, San José, Calif. EUA, 1996, p. 4.

(17) *Idem.*

(18) Agencia de Servicios Sociales. *op. cit.* p.5.

(19) *op. cit.* p. 7.

CAPÍTULO SEGUNDO

CASO AURELIA NAVARRO PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO SEGUNDO

CASO AURELIA NAVARRO PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD

Una vez revisadas las diferentes disposiciones jurídicas aplicables al caso concreto, tanto del punto de vista internacional, nacional y estadounidense, a continuación expondremos en orden cronológico el proceso en que concluyó con la pérdida de patria potestad de sus menores hijos.

En agosto 23 de 1991 la Policía de la ciudad de San José, California, ejecutó una orden de cateo en el domicilio del SR. ROGELIO APARICIO, encontrándose presente ese día también su esposa la SRA. AURELIA NAVARRO, sus hijos todos menores de edad, de nombres JESÚS, ZULEMA, GUADALUPE, JAZMÍN, IRASEMA todos de apellido APARICIO NAVARRO.⁽¹⁾

El motivo de la ejecución de esa orden se debió a que el SR. APARICIO estaba inmiscuido en la venta ilegal de narcóticos, en el acto encontró la Policía cocaína y dinero en efectivo producto de la venta de la misma, por tal motivo los mayores de edad fueron arrestados y los 5 menores fueron puestos bajo custodia provisional en un albergue del Condado de Santa Clara, a disposición de la AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, especialmente del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA Y LOS MENORES.

Con fecha 27 de agosto del mismo año el DEPARTAMENTO mencionado con antelación presentó una solicitud a la Corte Juvenil del Condado de Santa Clara basado en las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Bienestar

del Estado de California que establece proteger a los menores de edad cuando éstos se encuentren en peligro y que impidan el desarrollo normal de sus capacidades e independencia.

En agosto 29 de 1991 los menores fueron cambiados de albergue, dictando el Juez acuerdo de señalar una audiencia de detención hasta que alguno de los padres fuera puesto en libertad y pudieran ejercer la custodia de los niños.

Durante este periodo de tiempo el trabajador social asignado al caso buscó familiares de los menores en la zona, siendo infructuosa su búsqueda, no obstante de que si existían familiares, sin embargo fueron temerosos de comparecer en la Corte para solicitar la custodia provisional de los niños toda vez que su status migratorio era de indocumentados en los Estados Unidos y presumían que al momento de comparecer fueran deportados de manera inmediata a México, siendo esto desgraciadamente el detonador para que las autoridades estadounidenses mantuvieran el acuerdo de que los menores siguieran en custodia provisional.

Fue en este momento cuando el DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA Y LOS MENORES debió notificar a las autoridades consulares mexicanas para que intervinieran en el caso y así buscar la reunificación familiar o en su defecto la repatriación de los niños con familiares directos en el Estado de Michoacán en México. Sin embargo, por desconocimiento de las disposiciones jurídicas internacionales y de las actividades de protección desarrolladas por los consulados mexicanos en el extranjero el Departamento no supo informar en

tiempo y forma a nuestra representación consular sobre la detención de los menores.

Cabe hacer mención que fue a partir de este caso que el Consulado Mexicano de la ciudad de San José empezó a participar en todos los juicios en los cuales se veían involucrados menores de edad ante las Cortes Juveniles de los diversos Condados de su jurisdicción, propiciando con esto la búsqueda de la reunificación familiar o en su defecto la repatriación con sus familiares directos en México.

No obstante de que se trataba de nacionales mexicanos y especialmente menores de edad nuestra representación consular fué notificada del caso por parte del abogado defensor público de la SRA. AURELIA NAVARRO hasta el mes de junio de 1993, casi 2 años después de iniciado el juicio.

En septiembre 12 de 1991 el trabajador social solicitó a la Corte que los niños fueran devueltos a su padre que ya había salido bajo fianza de la cárcel y que el Departamento se encargaría de realizar un convenio de supervisión en su domicilio y que la petición de audiencia de detención se retiraría, sin embargo el Juez no lo autorizó manteniendo el caso activo y los menores bajo custodia provisional del Condado en un albergue.

Por lo que respecta a la madre seguía todavía en prisión en el Centro de Rehabilitación Elmwood, sin derecho a ver a sus hijos, para esas fechas el SR. APARICIO compareció a la Corte acreditando la paternidad de los niños, sin embargo una vez realizada la audiencia y ante la negativa de la Corte de

devolvérselos, éste se sustrajo de la justicia estadounidense dejando a su suerte a la madre y los menores hijos.

Con fecha octubre 9 de 1991 el Juez emitió un acuerdo en el que no da validez a los alegatos presentados por la defensa de la SRA. AURELIA NAVARRO respecto a la situación de cada menor y por consecuencia tomó como válidos los argumentos expuestos por el abogado del Departamento a través de la investigación realizada por el trabajador social del Condado, para tal efecto el Juez ordenó que la madre realizara un programa de educación para padres y de consultas sobre las drogas, autorizando también la visita con sus hijos.

Para diciembre 6 de 1991 el trabajador social presentó a la Corte una petición manifestando que la menor de nombre Guadalupe Aparicio Navarro presentaba rasgos de trauma por penetración (abuso sexual) y de acuerdo a la evidencia presentada el Juez ordenó la inmediata cancelación de visitas con el padre y en el caso de la madre, éstas se desarrollarían con la presencia del Trabajador Social hasta en tanto no se acreditara la responsabilidad del daño inferido a la menor.

En fecha marzo 3 de 1992 AURELIA NAVARRO fue sentenciada en el juicio penal a 3 años de prisión por el delito de posesión y venta de drogas.

En abril 1 de 1992 el caso continuaba y se llevó a cabo la audiencia de seis meses de revisión del caso (SIX MONTHS DEPENDENCY REVIEW), reportando el Trabajador Social que la madre había realizado en ese tiempo 120 horas de curso respecto a los programas de educación para padres y de consultas sobre drogas, para tal efecto el Juez acordó que continuara con los programas establecidos y

que siguiera con el plan de visitas mensuales con sus hijos hasta que fuera liberada de la cárcel.

Con fecha septiembre 23 de 1992 se llevó a cabo la audiencia de 12 meses de revisión del caso (TWELVE MONTHS REVIEW CASE), reportando el trabajador social que la sentenciada saldría de la cárcel en marzo de 1993 y que sería sujeta a una inmediata deportación a México toda vez que su entrada al país había sido ilegal, así mismo que durante este tiempo su comportamiento y conducta con sus hijos fue de muy buena relación y con cariño, cumpliendo también con los programas previamente ordenados por la Corte.

No obstante lo mencionado y acordado en las audiencias de revisión del caso de 6 y 12 meses, en esa misma fecha el Departamento presentó una petición a la Corte en donde anexaba un reporte en el que recomendaba la cancelación de los servicios de reunificación familiar solicitando se llevara a cabo una audiencia con un plan permanente y de terminación de la patria potestad de ambos padres.

Esto derivado de que la SRA. AURELIA NAVARRO había desistido de comparecer a las audiencias de revisión del caso de los 6 y 12 meses, estando indebidamente preparadas de manera alevosa por el trabajador social para poder solicitar así y sin ningún problema la pérdida de patria potestad y posteriormente la adopción. La defensa argumentó en este caso que el trabajador social no notificó e informó debidamente las consecuencias de renunciar por escrito a las audiencias mencionadas con antelación, creyendo que al no comparecer saldría más pronto de la cárcel y se llevaría a cabo la reunificación con sus hijos, por tal

motivo y en virtud del documento firmado de desistimiento por la SRA. NAVARRO el Juez acordó la admisión de dicho escrito y señaló fecha de audiencia para establecer un plan permanente (PERMANENCY PLANNING HEARING) en fecha enero 20 de 1993.

El 13 de octubre de 1992 se llevó a cabo una audiencia respecto a la custodia provisional de los menores toda vez que el tutor que tenía a los niños no podía ejercer ese cargo por más tiempo, por consiguiente el Juez depositó a dos de ellos con un nuevo tutor y los otros 3 con diferentes tutores, cabe mencionar que para el desahogo de esta audiencia no estuvo presente la madre, ni mucho menos se notificó al Consulado Mexicano de esta audiencia.

Cabe mencionar que hasta la fecha mencionada con anterioridad los menores fueron separados en diferentes hogares sustitutos y no fueron reunificados en grupo hasta junio 1 de 1993.

En fecha 11 de enero de 1993 a petición del abogado defensor se llevó a cabo una audiencia para revisar el caso respecto a la audiencia de los 12 meses, para lo cual la Corte ordenó la comparecencia de la madre.

Durante el desahogo de la audiencia el Juez ordenó la terminación de los servicios de reunificación basado en el Código de Instituciones y Bienestar, señalándose fecha de resolución el 28 de abril de 1993.

En la fecha señalada con antelación el trabajador social solicitó a la Corte el cambio de situación jurídica de los menores a adopción, por lo cual la Corte señaló nueva fecha para acordar lo conducente.

Asimismo ésta fué la última audiencia que atendió personalmente la SRA. AURELIA NAVARRO autorizada por la Corte, no obstante las múltiples peticiones hechas por la defensa y las de forma particular que ella hizo.

Para el mes de mayo de 1993, la SRA. NAVARRO cumplió con la sentencia impuesta e inmediatamente fue deportada a México desgraciadamente sin notificación alguna a la representación consular de la ciudad de San José y mucho menos regresarse acompañada con sus hijos.

Con fecha 28 de junio de 1993 no obstante que la madre había sido deportada a México, el abogado defensor solicitó a la Corte cambio de circunstancias del caso por las razones expuestas con antelación, asimismo manifestó que solicitaría el apoyo del gobierno mexicano para determinar el modo de vivir de la SRA. NAVARRO en Zicuirán, Michoacán, esto con la finalidad de poder llevar a cabo la reunificación familiar, señalándose el 30 de junio de 1993 audiencia para acordar lo conducente.

En esta misma fecha y previa solicitud hecha por el abogado de la SRA. NAVARRO promovió mi participación en juicio, sin embargo el Juez negó mi admisión a la misma manifestando que el juicio que se ventilaba en ese momento estaba regido sólo por las leyes americanas y especialmente las del Estado de California, que la nación mexicana no tenía que participar en la misma por no ser un asunto de índole internacional.

Ante la negativa del Juez, el abogado defensor promovió apelación contra ese auto, manifestando como agravios el que no se estuviera cumpliendo con lo

establecido con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Asimismo el Consulado de México de la ciudad de San José estaba por solicitar a la Embajada de México en Washington la presentación ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos una protesta oficial por la negativa del Juez de la Corte Juvenil del Condado de Santa Clara de permitir la representación de los intereses de un conacional mexicano en juicio.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Estado de California resolvió autorizando la participación del Cónsul de México en el juicio y además que estuviera representado por conducto de un abogado americano.

Una vez que se le notificó al A quo dicha resolución dictó acuerdo autorizando mi participación en juicio, en el cual ofrecimos pruebas y muestras diplomáticas de que el mejor interés de los menores era regresar con su madre a México y que para tal efecto nuestro gobierno se comprometía a apoyar tanto económicamente, socialmente, educativamente y con servicios de salud a los menores al repatriarlos.

Para tal efecto pedimos el apoyo del Gobierno del Estado de Michoacán, del DIF Estatal, de la Secretarías de Salud, de Educación Pública, mismos que a través de un documento conjunto se hizo llegar al DIF Estatal y este mismo al Consulado de México en San José y que finalmente lo ofrecimos como prueba en el juicio, el cual fue admitido y objetado por el Departamento de Servicios a la Familia y de los Menores por considerar que no era suficiente para garantizar el mejor interés de los niños.

Como réplica a los comentarios vertidos por el Departamento manifestamos que el mejor interés de los menores no sólo estaba sujeto al bienestar económico o a las comodidades de una vida moderna en una casa norteamericana, que se tomara en cuenta el aspecto moral, cultural, étnico, religioso, valores familiares, psicológico que son totalmente diferentes al modo anglosajón y que existía una madre que los reclamaba, que nunca quiso abandonarlos y que al momento de ser deportada solicitó que se los regresaran, que nunca renunció a la patria potestad y que había sido engañada por el Trabajador Social para renunciar a las comparecencias de las audiencias de reunificación familiar de los 6 y 12 meses.

El DIF Estatal de Michoacán realizó estudio socioeconómico y psicológico a la SRA. NAVARRO en Zicuirán, el cual dió como resultado que sí era factible el que ella pudiera atender a sus hijos con el apoyo del gobierno mexicano. Sin embargo, el Departamento de Servicios a la Familia y a los Menores de manera extraoficial contrató los servicios de una ex trabajadora social y la enviaron a México con la finalidad de constatar si lo manifestado en el estudio elaborado por el DIF era cierto. Al darnos cuenta el abogado defensor y el suscrito objetamos por la falta de confianza de documentos presentados por autoridades que forman parte de una nación soberana y que se estaba conduciendo con la verdad.

En virtud de lo expuesto con antelación el Juez señaló fecha de audiencia para analizar los documentos estableciendo el 15 de octubre de 1993 para su desahogo. Por tal motivo el trabajador social en la audiencia hizo sus alegatos de manera personal y con un tinte totalmente anglosajón en la que establecía que el mejor interés de los menores era que continuaran en los Estados Unidos sin

importar el sentimiento de la madre. Posteriormente tocó el derecho de rebatir esa postura por parte del abogado defensor y del Consulado manifestando que el estudio había sido debidamente elaborado con toda la información necesaria para el caso y de acuerdo a las especificaciones que la Corte había solicitado se tomaran en cuenta por las autoridades mexicanas al elaborar el estudio correspondiente.

Desafortunadamente el Juez admitió también el estudio socioeconómico elaborado por la ex trabajador social para hacer un análisis comparativo del caso y tomarlos en cuenta al momento de resolver en definitiva.

En diciembre 2 de 1993 el abogado defensor de la demandada, solicitó se realizara evaluación psicológica a los menores para conocer su grado de afectación del caso o de adaptabilidad al medio para lo cual la Corte admitió al perito presentado por él, asimismo la Corte designó uno de oficio como apoyo por la importancia del caso, dictámenes que fueron rendidos con fecha diciembre 6 de 1993.

Con fecha febrero 9 de 1994 el Juez dictó un acuerdo en el que manifestaba que no existía cambios de circunstancias del caso y que de acuerdo a las condiciones solicitadas por la defensa de realizar una revisión al plan permanente de los menores no era procedente, por tal motivo se señaló el 15 de junio de 1994 para determinar lo conducente.

Esa misma fecha se acordó que sí fue notificada en tiempo y forma AURELIA NAVARRO en Zicuirán, Michoacán y que tenían en el expediente el acuse de recibo de las notificaciones correspondientes.

Sin embargo, la Corte ordenó se siguiera el procedimiento manifestando que se estaba cumpliendo con la ley y señaló el 11 de julio de 1994 para el desahogo de la audiencia y resolución del plan permanente. No obstante lo anterior, el abogado defensor manifestó que su derecho a la garantía de audiencia había sido violado en virtud de que al momento en que la deportaron a México no se le pudo informar sobre el seguimiento del juicio y mucho menos que se pudiera defender personalmente, no obstante que se solicitó a las autoridades de inmigración autorización para que pudiera comparecer en Corte y alegar lo que a su derecho correspondiera.

Era claro y evidente que el juicio versaría sobre la adopción de los menores, toda vez que según la Corte el mejor interés de los menores sería la pérdida de patria potestad, el cambio de custodia y la pérdida del control de los padres biológicos.

Así pues, en fecha 22 de agosto de 1994, el Juez dictó resolución en los términos narrados con antelación, por consecuencia el abogado defensor presentó apelación en contra de la resolución emitida por el A quo, misma que fue recibida por la Corte de Apelaciones del Estado de California Sexto Distrito el 6 de abril de 1995 y resuelta el 22 de junio de 1995, esta sentencia ante el Tribunal de Alzada confirmó la resolución del Juez en el sentido de apoyar la pérdida de patria

potestad de los SRES. ROGELIO APARICIO Y AURELIA NAVARRO sobre sus 5 menores hijos, con base al mejor interés de los menores.

En virtud de las flagrantes violaciones emitidas por ambas autoridades judiciales el abogado defensor, con fecha 19 de septiembre de 1995, presentó demanda de amparo, PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI ante la SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA contra actos violatorios de garantías constitucionales por parte de la AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE SANTA CLARA, DEL JUEZ DE LA CORTE JUVENIL 42 DEL CONDADO Y DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO DE CALIFORNIA. Se tomó la decisión de seguir este procedimiento toda vez que, por las implicaciones del caso, la violación de Convenciones Internacionales, la gravedad del asunto se requería de dicha acción. Asimismo para evitar que los niños tuvieran tiempo de adaptarse al sistema americano, por consecuencia el caso se turnó directamente a la Suprema Corte de la Nación, juicio que en el mes de octubre de 1995 la Suprema Corte dictó acuerdo de no admisión de la demanda en virtud de considerar que dicho caso no era de interés para la Suprema Corte.

Como argumentos utilizados en la petición formulada, el abogado defensor se basó en las siguientes violaciones por parte de las autoridades antes mencionadas.

1.- A la procesada le violaron sus derechos de garantía de audiencia y de un juicio justo, en virtud de que el procedimiento se siguió sin su presencia en juicio, no obstante que de manera reiterada se solicitó a la Corte pidiera a las autoridades de migración que no la deportaran y aún así lo hicieron, solicitándoles posteriormente le autorizaran visa para comparecer en los Estados Unidos y defenderse, basado en el artículo 14 de la Constitución Federal.

2.- La defensa jamás autorizó, allanó o se desistió de las audiencias a las que tenía que comparecer la SRA. NAVARRO en su juicio, motivando esto a que continuara el caso sin su presencia, lo que motivó que el Juez en la revisión de los 12 meses se determinara la pérdida de patria potestad de sus 5 menores hijos.

3.- La falta de comparecencia en las 2 audiencias la de 6 y 12 meses dieron el cambio significativo del caso para que el Juez determinara y diera por terminado el proceso de reunificación a través de un plan permanente y emitiera la resolución de pérdida de patria potestad.

4.- La violación del artículo 6 de la Constitución Federal por parte de la AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE SANTA CLARA, DEL JUEZ DE LA CORTE JUVENIL 42 DEL CONDADO Y DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO DE CALIFORNIA en el sentido de no acatar lo establecido en este precepto que establece la supremacía constitucional y el respeto a los tratados celebrados por los Estados Unidos de América, debiendo respetar y acatar dichos mandamientos. Cualquier conflicto que se susite entre algún tratado y alguna ley

estatal deberá de resolverse a favor del tratado bajo el tenor de lo anteriormente mencionado.

De tal manera que de manera sistemática se violó lo establecido en la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES en el rubro de protección consular, de notificación y especialmente en atención de menores extranjeros.

Por consecuencia podemos concluir que el sistema judicial americano no es el más justo del mundo, no obstante las reiteradas ocasiones en que se interpusieron diversos recursos legales contra autos y resoluciones de los juicios, ofrecimiento de pruebas, comparecencias de autoridades, el apoyo del gobierno mexicano en el caso, testigos y demás medios de convicción, el sistema americano tiene sus fallas desde el punto de vista legal y sobre todo en aspectos de justicia.

Es importante mencionar que no obstante que se trató de manera enérgica a las autoridades americanas con el apoyo de abogados americanos contratados como asesores legales del Consulado Mexicano, mismos que participaron en el juicio haciendo valer sus pretensiones fundamentados y motivados conforme a las normas jurídicas aplicables al caso, en un principio durante el proceso también se presentaron algunos problemas con las autoridades superiores mexicanas de la SRE quienes miópes desde el punto de vista legal y humano, carecieron de solidaridad y sensibilidad para apoyarnos y darle seguimiento a este caso tan importante. No obstante lo anterior, las gestiones que realizamos posteriormente con las autoridades centrales de nuestro país fueron con el tiempo fructificando

positivamente al ver que estábamos dando una atención especial a un caso en que estaba involucrado el mejor interés de menores mexicanos.

Sin embargo considero que al gobierno mexicano le faltó decisión de entrar al fondo del asunto, presentando una protesta oficial contra las autoridades americanas en el Departamento de Estado o haber demandado ante la Corte Internacional de Justicia el caso, toda vez que estaba próxima la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y su atención principal estaba enfocada a este rubro y no al interés de defender a una conacional que perdió la patria potestad de sus hijos.

- (1) Suprema Corte de los Estados Unidos [en línea]. 2 de octubre de 1995. p. 1.
<http://spieibauer.com> [consulta: 4 de junio de 2004].

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

PRIMERA: En la práctica, las autoridades norteamericanas no cumplen con las Convenciones Internacionales, haciendo valer su sistema jurídico primero, basado en el mejor interés de su país y ciudadanos.

SEGUNDA: En el caso Aurelia Navarro existió una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en cuanto a lo establecido por el artículo 38, que manda u ordena la comunicación con el Estado receptor, toda vez que el gobierno de los Estados Unidos de América no autorizó en principio la comunicación con la procesada.

TERCERA: El Juez de la Corte Juvenil violó incluso preceptos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos de América (Garantía de Audiencia y de Legalidad), así como también de Leyes del Estado de California, correspondientes al Compendio de Leyes aplicables a los casos de Dependencia Juvenil.

CUARTA: El personal del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Clara, no actuó con honestidad, engañando a la Señora Aurelia Navarro para firmar escritos sin conocer su contenido o sus alcances.

QUINTA: Es necesario implementar una campaña de difusión dirigida a nuestros conacionales en el extranjero, sobre los derechos que la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares les otorga.

ANEXOS

A N E X O 1

**AURELIA N. PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI
TO THE CHIEF JUSTICE OF THE UNITED STATES
OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES**

IN THE
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
OCTOBER TERM, 1995
AURELIA N.
Petitioner,
vs.
SANTA CLARA COUNTY DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES,
Respondent
ON PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI
TO THE COURT OF APPEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA
SIXTH APPELLATE DISTRICT
PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI

Thomas J. Spielbauer
Deputy Public Defender
Santa Clara County Public Defender's Office
4 North Second Street, Suite 1270
San Jose, CA 95113
(408)299-7226

Counsel of Record
Attorney for Petitioner

QUESTIONS PRESENTED FOR REVIEW

1. May a foreign national mother be prevented from attending state court proceedings which adjudge and eventually extinguish the parental relationship of a mother and her five foreign national children without offending constitutional due process of law? What due process implications are there when a county agency, in disobedience of a Superior Court Judge's order, returns a mother to state prison from where she is subsequently deported? What due process implications are there when a mother cannot attend hearings to which she is statutorily permitted to attend and which adjudicate her fundamental and essential rights? What are the appropriate remedies in these circumstances?

2. What application does the Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol on Disputes of 1963 have to state juvenile dependency proceedings when the state takes into protective custody and thereafter places into foster care the citizen children of a foreign nation? What notice obligations and obligations generally does this Convention create on state departments of social services and the state judiciary, particularly towards the consulates of the children's nationality state in these instances? Is there an interrelationship between the Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol on Disputes of 1963 and a foreign country's role as *parens patriae* of its citizen children? What are the *parens patriae* interests of the children's country of nationality in circumstances such as these? How should a host country such as the United States honor these rights?

PARTIES TO THE PROCEEDINGS

Petitioner: Aurelia N., mother of the minor children

Respondent: Santa Clara County Department of Social Services

Real party in interest: Jazmine A., minor child

Zulema A., minor child

Indira A., minor child

Jessica A., minor child

Guadalupe A., minor child

Real party in interest: Santa Clara County Superior Court

TABLE OF AUTHORITIES

Alfred L. Snapp, etc. v. Puerto Rico ex rel Barez (1982) 458 U.S. 592

Asakura v. Seattle (1924) 265 U.S. 332

Bacardi Corp. v. Domenech, 311 U.S. 150

Chambers v. Mississippi (1973) 410 U.S. 284

Cordova v. Superior Court (1983) 148 Cal.App.3d 177

Elkins v. United States, 364 U.S. 206

Factor v. Laubenheimer, 290 U.S. 276

Free v. Bland (1962) 369 U.S. 663

Hauenstein v. Lynham, 100 U.S. 483

In re Amy M. (1991) 232 Cal.App.3d 849

In re Angelia P. (1981) 28 Cal.3d 908

In re B. G. (1974) 11 Cal.3d 679

In re Corey A. (1991) 227 Cal.App.3d 339

In re J. T. (1974) 40 Cal.App.3d 633

In re Jeremy W. (1992) 3 Cal.App.4th 1407

In re Malinda S. (1990) 51 Cal.3d 368

In re Stephanie M. (1994) 7 Cal.4th 295

Jordan v. Tashiro, 278 U.S. 123

Lassiter v. Department of Social Services (1981) 452 U.S. 18

Lois R. v. Superior Court (1971) 19 Cal.App.3d 895

May v. Anderson (1953) 345 U.S. 528

Meyers v. Nebraska (1923) 262 U.S. 390

Nielsen v. Johnson (1928) 279 U.S. 47

People v. Mejia (1976) 57 Cal.App.3d 574

People v. Valencia (1990) 218 Cal.App.3d 808

Shanks v. Dupont (US) 3 Pet. 242, 249, 7 L.Ed. 666

Skinner v. Oklahoma (1942) 316 U.S. 535

Stanley v. Illinois (1972) 405 U.S. 645

Todok v. Union State Bank (1930) 281 U.S. 449

United States v. Reid (1934; CCA 9th) 73 F.2d 153 (writ of certiorari denied in (1936) 299 U.S. 544, 81 L.Ed. 400, 57 S.Ct. 29)

United States v. Valenzuela-Bernal (1982) 458 U.S. 858

Valentine v. United States (1936) 299 U.S. 5

Walker v. Superior Court (1988) 47 Cal.3d 112

FEDERAL STATUTES 28 U.S.C. § 1257

SUPREME COURT RULES Supreme Court Rule 10(1)(b)

Supreme Court Rule 10(1)(c)

UNITED STATES CONSTITUTION

Article VI of the United States Constitution

United States Constitution, Amendment 14

CALIFORNIA STATUTES

California Constitution, Article I § 15

California Constitution, Article I § 7

California Welfare and Institutions Code § 300(g)

Welfare & Institutions Code § 366.26

Welfare and Institutions Code § 300(b)

Welfare and Institutions Code § 300(d)

Welfare and Institutions Code § 311

Welfare and Institutions Code § 326

Welfare and Institutions Code § 341

Welfare and Institutions Code § 342

Welfare and Institutions Code § 349

Welfare and Institutions Code § 353

Welfare and Institutions Code § 366.23

Welfare and Institutions Code § 388

California Rules of Court, rule 1410

California Rules of Court, rule 1449

OTHER AUTHORITIES

Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol
on Disputes of 1963

**IN THE
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
OCTOBER TERM, 1995**

**AURELIA N.
Petitioner,
vs.**

SANTA CLARA COUNTY DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES,

Respondent

**ON PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI
TO THE COURT OF APPEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA
SIXTH APPELLATE DISTRICT
PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI
TO CHIEF JUSTICE OF THE UNITED STATES WILLIAM H. REHNQUIST
AND THE
ASSOCIATE JUSTICES OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES:**

Petitioner Aurelia N., by and through her counsel of record, respectfully prays that a writ of certiorari issue to review a judgment and opinion of the Court of Appeal of the State of California, Sixth Appellate District, filed in the above proceeding, attached hereto as Appendix A and the California Supreme Court's order denying review entered on June 22, 1995 and attached hereto as Appendix B.

OPINIONS BELOW

The opinion by the Sixth District Court of Appeal affirmed the judgment of the Santa Clara County Juvenile Court. This opinion is attached hereto as Appendix A. The California Supreme Court denied review of the decision. That denial is attached as Appendix B.

JURISDICTION

The jurisdiction of this Court to review the judgment of the Fifth District Court of Appeal of the State of California is invoked under 28 U.S.C. section 1257, subdivision (a), and Supreme Court Rules 10(1)(b) and 10(1)(c).

DATE OF ENTRY OF JUDGMENT

The Santa Clara County Juvenile Court's judgment terminating Aurelia N.'s parental rights to her children Jazmine A., Zulema A., Indira A., Jessica A., Guadalupe A., was entered on July 11, 1994. A copy of the minute order of that hearing is attached as Appendix D, 7/11/94.

The opinion of the Sixth District Court of Appeal was filed on April 6, 1995. (Appendix A.) On June 22, 1995, the California Supreme Court denied review of the matter. A copy of that order is attached as Appendix B.

CONSTITUTIONAL PROVISION AT ISSUE

Article VI of the United States Constitution:

"This Constitution and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding."

United States Constitution, Amendment 14:

"All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws."

STATEMENT OF THE CASE

Procedural History

On August 23, 1991, police executed a search warrant on the San Jose residence of appellant Aurelia N., her common law husband Rogelio A., and their five natural children, Je..., Zu..., Gua..., J..., and I... (CT 943-946; RT 490-492.) Appellant and her husband were arrested, after police seized cocaine and cash traced to a drug transaction between undercover police and Mr. A.. All five children were placed in protective custody on the same date. On August 27, 1991, the Department of Family and Children Services for the County of Santa Clara (hereinafter referred to as DFCS) filed petitions with the Juvenile Court pursuant to California Welfare and Institutions Code §§ 300(b) and 300(g).

On August 29, 1991, the five children were ordered detained and were transferred from the Children's Shelter to emergency satellite homes. The initial detention recommendations had been to calendar a re-detention hearing as soon as one of the parents were released from incarceration and could take custody of the children. The investigating social worker attempted to find relative placement for the children, without any success. See Appendix M.

Even though all of the five children were Mexican citizens and this was known from the beginning, the Mexican Consul in San Jose was never noticed of these proceedings. He did not become involved in these proceedings until late June 1993, almost two years later, after his assistance was sought by counsel for appellant.

On September 12, 1991, the investigating social worker requested that the children be released to the father, who was then out of custody, under an informal supervision agreement, and that the petition be dismissed. The trial court denied these recommendations but instead kept the children in foster care. (See Appendix D, 9/12/91 minute order).

Appellant was incarcerated at Elmwood Rehabilitation Center, and no visitation with her five daughters was permitted by the court. Mr. A. admitted paternity of the five minors, and was subsequently released on bail. He proceeded to skip bail and make his whereabouts unknown through the date of disposition of the present hearing.

On October 9, 1991, contested proceedings commenced on the section 300 petition.

On the same date, the court sustained the California Welfare and Institutions Code § 300(g) allegations , and found the section 300(b) allegations to be not true, as to each minor. (See Appendix D, 10/9/91 minute order). On this date, the Court adopted as modified the recommended orders from the September 16, 1991 social worker's report. These orders required that the natural mother complete drug counseling and parent education. They also required marriage counseling if the natural mother and the father would be remaining together. These orders additionally ordered monthly visitation with the mother while she was incarcerated.

On December 6, 1991, a subsequent petition (section 342) was⁴ filed in Juvenile Court alleging, pursuant to section 300(d) that⁵ Guadalupe had been diagnosed on October 1, 1991, with definite evidence of prior penetrating trauma, and that her parents could not provide a reasonable explanation for the injury.

Trial setting on the section 342 petition proceeded on February 3, 1992. On that date, the court ordered that there be no visitation between the father and the minors and that visitation between appellant and her daughters be at the discretion of the social worker, pending disposition of the petition.

On March 3, 1992, appellant was sentenced to three years in prison on the drug possession and sales charges.

On March 9, 1992, DFCS amended the section 342 petition to allege the applicability of section 300(b) in lieu of section 300(d), and⁶ the matter was submitted by the mother at contested proceedings. The court found the amended petition to be true. On the same date, the trial court fashioned its dispositional orders which reiterated the exact same previous requirements that the natural mother undergo parent education training and drug counseling and education as had been made at the initial disposition of October 9, 1991.

On April 1, 1992, the case came up for six month dependency review. The social worker's report indicated that the mother completed 120 hours of the step up, in custody, program which was related to drug abuse education. This was achieved while the mother was incarcerated locally. The report further

indicated that the mother was motivated to complete her service contract requirements. The report further indicated that mother was involved in a parent education program. (See Appendix N.) further contained copies of a Certificate of Completion of the 120 hours in the Stride Program.

The court adopted the recommendations of the social worker in his related report. The previous orders of the court were ordered to continue in effect. Visitation between mother and daughters was ordered at least once per month if appellant was locally incarcerated, and less frequently if she was incarcerated out of county, with weekly visitation once her incarceration was completed.

On September 23, 1992, the case came on for twelve month review. The social worker's report of September 23, 1992 reflected that concern that the mother may be released from custody in March 1993 but was facing deportation. It also reflected, however, the fact that the mother was taking a parent education class while in prison and expressed love and caring for her five children. (See Appendix N.) The request of appellant's attorney for a trial was denied by the court.

The social worker submitted a report for the September 23, 1992 hearing which recommended termination of reunification services and the setting of a permanency planning hearing pursuant to section 366.26 for termination of parental rights as to both parents. Appellant had executed a waiver of her appearance at the review hearing, and the court found it to be valid over objection of mother's counsel. The trial court further denied counsel for mother's request for a contested hearing. The court adopted the recommended orders of the social worker and set a permanency planning hearing under section 366.26 for January 20, 1993. (See Appendix D, 9/23/92 minute order.)

At the time that the social worker was recommending to the trial court that the permanent plan for the five children should be changed from long term foster care to adoption in his social worker's report of April 28, 1993 (Appendix P), the five children were still a month away from being placed together into their foster adoptive home. They were finally placed there together as a group on June 1, 1993 although some of the children began arriving there in January 1993. See Appendix L for the placement history of the minors during the course of the dependency.

Appellant's attorney promptly filed a petition for writ of mandate with the California Court of Appeal, Sixth Appellate District to rescind the court's orders at the September 23, 1992, twelve month review hearing.

On October 13, 1992, the matter came back before the trial court for a detention hearing. The five A. children had been removed from the caretaker as the caretaker could no longer provide for all five children. Two of the children were placed into the same foster home and the remaining three children into separate foster homes each. The Mexican Consul was not noticed of this hearing, and mother was not present for the detention hearing.

On November 24, 1992, the trial court re-considered its September 23, 1992 holdings, and, granting the relief requested by mother in her writ petition, vacated its twelve month review orders. The court set a settlement conference for January 6, 1993, and a hearing date for January 11, 1993, for renewed consideration of the twelve month review as to each of the parents and the minors. The court further ordered that mother be transported from state prison to that hearing.

On January 11, 1993, the matter came on for contested hearing pursuant to Welfare & Institutions Code § 366.21. The Court then terminated reunification services and set the matter for a hearing pursuant to Welfare & Institutions Code § 366.26. The (trial setting/resolution) hearing date set was April 28, 1993. Mother was present at the January 11, 1993 hearing.

On April 28, 1993, the social worker in the case, Chris Peck, requested a continuance to notice the mother due to the fact that the permanent plan being proposed was changed from long term foster care to that of adoption. The court continued the matter to June 30, 1993. Additionally, the court ordered that the mother, who was present at the hearing, was to be detained locally so that she would be present at the 366.26 permanency planning hearing, something which she fervently stated that she wanted to be present at and to contest. The Santa Clara County Department of Corrections nonetheless returned her to state prison.

This April 28, 1993 court hearing was the last court hearing that the mother and petitioner, Aurelia N., would be permitted to attend. From this point on, petitioner never attended any court hearings even though she very much wanted

to and had communicated this on numerous occasions. She was prevented from attending by continuing state action.

During the month of May 1993, the mother was deported to Mexico where she apparently still resides.

On June 28, 1993, counsel for mother filed a motion to continue the permanency planning hearing pursuant to Welfare and Institutions Code § 366.26 as well as a Petition alleging Changed Circumstances under Welfare and Institutions Code § 388 . The Petition of Changed Circumstances is attached as Appendix H.

The petition alleged a change of circumstances consisting of appellant's establishment of a suitable home for appellant's five daughters in Zicuiran, Mexico, following her release from prison in the United States, and her immediate deportation to Mexico. The petition further alleged that the Mexican government was prepared to furnish the court with an evaluation of appellant's new home and to provide assistance and supervision in reuniting the family.

On June 30, 1993, the Court set/continued the 366.26 hearing for settlement conference to July 29, 1993 and for trial to August 16 and August 17, 1993. The Third Secretary to the Mexican Consul of the Government of Mexico came to the June 30th court hearing but was denied admission, even though he was present to protect the interests of the mother who was in Mexico and even though he wished to address the court. (See Appendix D, 6/30/93 minute order.) It was on this date that the Mexican Consul made its first appearance on this case, after counsel for mother sought its assistance in the matter. The Third Secretary was **Javier Baylon**. The function of the Third Secretary is the protection of the civil rights of Mexican Citizens in the United States. Javier Baylon was subsequently permitted to attend court proceedings with limited right of participation, and was permitted the assistance of counsel. This presence occurred over two months later, after mother took her second petition for a writ of mandate to the California Court of Appeal, Sixth Appellate District.

On July 2, 1993, the Court denied the section 388 petition without a hearing. (See Appendix E.) Appellant's attorney promptly filed a petition for writ of mandate in the Court of Appeal to reinstate the section 388 petition. On July 27, 1993, the Court of Appeal stayed the scheduled section 366.26

hearing, pending determination of the writ. On October 1, 1993, the Court of Appeal directed that appellant's writ issue, ordering the superior court to vacate its July 2, 1993, order, and to conduct a full evidentiary hearing on the mother's section 388 petition. (Unpublished Opinion of October 1, 1993, in case no. H011468.) See Appendix C.

In its opinion, the Appellate Court ordered the trial court to grant an evidentiary hearing on mother's 388 petition within 30 days. On October 13, 1993, all parties waived the 30 days and the § 388 petition remained in trial setting status October 13, October 15, November 16, November 30, and December 2, 1993.

On October 15, 1993, social worker Christopher Peck (hereinafter referred to as Mr. Peck, or Peck) submitted proposed questions for the Mexican D.I.F. Appellant's attorney objected that the proposed 8 questions were culturally biased in that they were phrased according to American, as opposed to Mexican, standards and culture. After argument to the judge, the parties agreed to allow the court to prepare the final draft of questions for the D.I.F.'s report.

On November 16, 1993, the court received the report of the D.I.F., with copies in both English and Spanish. That report is attached as Appendix I. The first hearing date was set for December 6, 1993.

On December 2, 1993, appellant's attorney moved for the appointment of an independent psychological evaluator well-versed in the Mexican culture for the five minors. The court took the matter under consideration. On December 6, 1993, the court chose Dr. Robert Montalvo to examine the children, and, in collaboration with the court's expert, Dr. Heenan, developed three questions with multiple parts for Dr. Montalvo's guidance.

On December 6, 1993, the court ordered that the attorney representing the interests of the Mexican Government at trial would have access to all of the social reports in the case, as well as to the reports prepared by the Mexican D.I.F., but that all other records would remain confidential as to the Mexican Government.9

Trial on the 388 modification petition commenced on December 6, 1993, and continued for eight days through January 24, 1994.

On February 9, 1994, the court issued its written Order After Hearing which determined that the Section 388 petition was denied, and that a Section 366.26 permanency planning hearing was set for June 15, 1994. (See Appendix E).

A timely Notice of Appeal was filed on behalf of appellant on April 8, 1994.

On June 15, 1994, the trial court entered a minute order confirming that due diligence had been exercised in attempting to serve the father. At that time, the social worker represented to the court that appellant had been served at her home in Zicuiran, Mexico, by certified, return receipt requested mail. Appellant's attorney explained to the court that even if the social worker was able to prove service on appellant, her due process right to be heard by the court would be abridged since she was unable to enter the country in order to participate in the forthcoming hearing, following her deportation to Mexico. Appellant's attorney asked for a stay of the section 366.26 hearing pending resolution of the pending appeal in case no. H012504. He indicated to the court that he did not have the ability to meaningfully communicate with his client in this case. The court set the contested hearing under section 366.26 for July 11, 1994. The permanency planning hearing occurred on July 11, 1994. Appellant's attorney represented to the court that his client did not waive her appearance. He stated that she had been precluded from attending the hearing as a result of state action by the Department of Corrections and Immigration Department, since she had been deported to Mexico following her release from prison in June, 1993, and was not permitted to cross over into the United States for the present hearing. The court indicated that it had "previously" found that appellant was duly noticed for the present hearing. Appellant's attorney reiterated his request that the hearing not proceed in appellant's absence. The court indicated its intention to proceed in appellant's absence.

Appellant's attorney did not cross-examine reporting social worker Christopher Peck, as he indicated that the absence of meaningful contact with his client prevented him from engaging in any productive questioning. (7/11/94 RT 6-7.) Appellant's attorney did call the social worker for a single question on direct examination, confirming that Peck had not had any contact with appellant since January, 1994. (7/11/94 RT 8.) No other witnesses were called by either party. (7/11/94 RT 9.)

The court found that all parties had been duly noticed. It found by clear and convincing evidence that it was likely that all five minors would be adopted. It found that termination of the parental rights of the minors' natural parents would be in their best interests. It declared the five minors free from the custody and control of their natural parents. (7/11/94 RT 12-13; See Appendix D, 7/11/94 minute order.)

A timely Notice of Appeal was filed by appellant on August 22, 1994.

On April 6, 1995, the California Court of Appeal, Sixth Appellate District, entered an order in an unpublished decision affirming the trial courts orders terminating mother's parental rights. A copy of that order is attached as Appendix A to this petition.

On June 22, 1995, the California Supreme Court denied mother's petition for review. A copy of that order is attached as Appendix B to this petition.

Statement of Facts

Social worker Christopher Peck supervised this case from the date of original disposition in October, 1991, to the time of the hearing terminating parental rights. (See Appendices L, N through S.) Appellant was already incarcerated at Elmwood when Peck began supervising the case. Initially, Ms. N. told Peck that she thought it would be psychologically damaging for her daughters to see her in jail, because the visits would have to be "behind the glass", without any direct contact. (See Appendices N and O.) She wanted visits ¹⁰ where she could be in the same room as the girls and hug them. Peck confirmed with prison officials that appellant was restricted to behind the glass visits until she was transferred to state prison in Stockton in July, 1992.

At the time of six month review, Mr. Peck requested the court to delete the service plan requirement of "couple's counseling", as he believed appellant's assurance that she was not planning to reunite with the minors' father. After conducting an unsuccessful search for Mr. A., Peck stopped focussing on him as Mr. Peck figured Mr. A. was out of the picture. He never acquired any information during his supervision of the case that indicated that appellant had any further contact with the father. (See Appendix N.)

At the time of six month review, Peck reported that Ms. N. desired to do well in order to get out of prison and reunite with her children, whom she missed alot. He continued:

"She is very cooperative with this social worker.... If it weren't for the mother's incarceration, she would be moving along to completing her Service Plan due to her apparent motivation." Peck also noted that appellant waived her right to attend the six month review hearing because she wanted to get through state prison quickly. (See Appendix N.)

At the time of the twelve month review hearing in September, 1992, there had still been no visits between Ms. N. and her daughters. Despite repeating in his report that appellant was "very cooperative", Peck opined that she had no means of supporting the minors and that reunification services should be terminated. He recommended an order for a section 366.26 hearing "for long term foster care". (See Appendix O.)

Appellant and her daughters were united at Northern California Women's Prison for a visit for the first time in over one year on October 17, 1992. At that time, the girls were each in their third foster home placement, and only Je... and Zu... were placed together. Je... expressed a strong desire to visit her mother. ¹¹ Appellant appeared loving and nurturing toward the children at the visit. She hugged and kissed each of the girls when they arrived and before they left. The three older girls were very pleased to see her. J... and In... did not recognize her, but they followed ¹² the older girls lead and quickly warmed up to her.

Prior to the next visit, appellant mailed letters to the girls, indicating that she wanted to take them back forever. At the visit, Ms. N. said she didn't want to leave the United States "without her babies". Peck observed that Je... and Zu... were upset by this comment. He told appellant to stop making these comments. Je... told Peck that she didn't want to return to Mexico with her mother. Still, appellant and the five girls were very affectionate with one another.

The December, 1992, visit went much the same as the November visit.

Due to appellant's comments about reuniting with her daughters, Mr. Peck did not follow through with visits in January and February, 1993. At this time, Je..., Zu... and Gu... were getting established in their current foster home. In March, 1993, Mr. Peck visited appellant and told her that she

could not say anything to the girls about reuniting with them again. She responded that if she couldn't talk to them about reuniting that she didn't want any more visits until the matter was resolved in court. Mr. Peck did not attempt to arrange any more visits between Ms. N. and her children from that day forward.

Mr. Peck spoke with appellant on May 3, 1993, while she was still incarcerated. Even though she was about to be released from prison and deported, he did not ask her for a forwarding address. Appellant was deported on May 17, 1993. Peck learned about the deportation on June 15, 1993. He next spoke with appellant in Mexico by phone on November 3, 1993. This was the last time that they spoke. He advised her that he had arranged for a home study and interview with a former Santa Clara County social worker living in Mexico named Judith Lopez-Villegas. She asked about her daughters. He told her how they were doing. He didn't think that it was appropriate to ask her any questions about the case at that time.

After the section 388 petition was scheduled for hearing, Mr. Peck contracted Ms. Lopez-Villegas to do an evaluation of appellant and her home in Zicuiran. Her report was received into evidence at the 388 modification hearing, even though she was not present to testify. That report is attached as Appendix J.

The court also received into evidence a comprehensive report prepared by the Mexican D.I.F.. The preparer of that report was not present to testify but her presence could have been arranged for by the Mexican Consulate. See Appendix I. ¹⁵

The court also received into evidence during the course of the hearing the psychological evaluation of Doctor Robert Montalvo. See Appendix K.

Social worker Peck testified at the modification hearing that he did not give the D.I.F. Report prepared by the Mexican Government a lot of weight. He felt that the report of Ms. Lopez-Villegas was more reliable, since it went into more detail regarding the inability of the family to work with the children in counseling. He didn't believe that the assurances of the Mexican Government would be followed through, due to a lack of commitment by the extended family. (RT 278, 625-633.) He felt that appellant would not be an adequate caretaker for the children even if she was available fulltime, "because she has not demonstrated that she can provide the nurturing that

is needed ... the minimum requirements, emotional part of it is lacking, among the other things." (RT 251.) He felt that she was a poor caretaker, because the detention report stated that the house in San Jose was in "unkempt" condition, and all five girls were in a "very dirty condition." (RT 254.) He felt that she was irremediable because she didn't protect the minors from drug sales, or exposure to physical abuse. (RT 780.) He recommended that the five minors not be returned to appellant and that the court proceed with a section 366.26 hearing for termination of parental rights and a plan of adoption. (See Appendix Q.)

Numerous witnesses testified at the 388 modification hearing. These witnesses included the social worker, Chris Peck; Dr. Muccilli, the therapist for the children; Je...; Zu...; Gu...; Javier Baylon; the foster-adoptive parents, Bermil and Norma; Mother was not present during any of the sessions of this modification hearing, having been deported. Counsel for mother did not waive his client's appearance at any of these sessions.

On December 13, 1993, the trial court signed a Judicial Request requesting that the Director of the Immigration Service permit the mother to cross the border and travel to San Jose, California for the purpose of attending the modification proceedings. See Appendix F.

The trial court issued its decision denying mother's request that her children be reunited with her on February 9, 1994. On that date, the trial court then set the matter for a permanency planning hearing for February 18, 1994. On that date, the department of social services requested a continuance for notice, and the matter was continued to June 15, 1994. On June 15, 1994, the trial court denied mother's request to stay the proceedings and set the matter for a contested hearing on July 11, 1994.

The hearing pursuant to Welfare and Institutions Code § 366.26 on July 11, 1994 was essentially a summary matter. Mother's attorney advised the court that he did not waive his client's appearance. He stated that she had been precluded from attending the hearing as a result of state action. The trial court noted counsel's concerns and proceeded forward with the permanency planning hearing. On July 11, 1994, the trial court terminated mother's parental rights over her five children, four of whom had been born in the country of Mexico. (See Appendix D, 7/11/94 minute order)

A timely Notice of Appeal was filed by appellant on August 22, 1994.

On April 6, 1995, the California Court of Appeal, Sixth Appellate District, entered an order in an unpublished decision affirming the trial courts orders terminating mother's parental rights. A copy of that order is attached as Appendix A to this petition.

On June 22, 1995, the California Supreme Court denied mother's petition for review. A copy of that order is attached as Appendix B.

ARGUMENT

I.

APPELLANT WAS DENIED DUE PROCESS OF LAW AT THE MODIFICATION HEARING AND AT THE SUBSEQUENT PERMANENCY PLANNING HEARING IN WHICH HER PARENTAL RIGHTS WERE TERMINATED.

The burden of proof at the section 388 hearing was on appellant by a preponderance of the evidence after she made her prima facie showing. In re Stephanie M. (1994) 7 Cal.4th 295; In re Jeremy W. (1992) 3 Cal.App.4th 1407. With this burden of proof, it is painfully clear that she had no chance of success without a meaningful opportunity to present evidence and to be heard. This most basic ingredient of procedural due process was abridged in this case, as appellant was excluded from the hearing by the United States government as a result of her deportation to Mexico seven months earlier.

The trial court sympathized with the plight of appellant and her attorney, who repeatedly asserted the due process violation, and refused to waive his client's appearance at the outset of proceedings each day of the pre-trial hearings and trial. (RT 4, 23-24, 208, 451, 660, 845.)

Since the hearing necessarily involved direct proof from appellant of the alleged changed circumstances, it was literally impossible for her to present her case. The trial was reduced to a sham proceeding. It transpired with continual unanswered questions about appellant's proposed home and the living arrangements for her five daughters, about her work status and proposed level of personal care of the minors, about the commitment of appellant and her extended family in Zicuiran to ensure that the three oldest girls obtain the psychological services offered by the

Mexican D.I.F., and about appellant's possible plan to reunite in Mexico with the children's father, who had posed a physical threat to the well being of the entire family when they were together. As a result of appellant's forced absence from the proceedings, there were far more questions than answers at the hearing.

At the permanency planning hearing of July 1994, appellant's trial attorney objected to the proceedings: "By state action [appellant] has been precluded from attending these proceedings....I do not waive her appearance. And I object to these proceedings. Particularly the serious nature of these proceedings in her absence." (7/11/94 RT 3.) He complained that his client wanted to attend the proceedings, "but she cannot legally cross into the United States to do so." (7/11/94 RT 4.) He asked the court "not to proceed today in the absence of my client." The court denied the request. (7/11/94 RT 5.) After deputy county counsel submitted the social report under section 366.26, appellant's trial attorney refrained from cross-examination, explaining "I do not have any questions of the social worker as I have not been able to have meaningful contact with my client since she was deported roughly around May of last year." (7/11/94 RT 6.)

In sum, due to the absence of appellant at both hearings, and the inability of her attorney to have any meaningful contact with her, the permanency planning hearing amounted to an uncontested hearing at which appellant lost all of her parental rights with regard to her five natural daughters. This forced absence denied appellant of her right to attend the proceedings, to participate in the preparation of her case, and to have an opportunity to be heard.

A. Appellant had a Right to Due Process of Law at the Modification Hearing and at the Permanency Planning Hearing

Appellant had a statutory right to attend the proceedings involving termination of her parental rights and the well-being of her minor children. (Sections 349, 366.23(a); California Rules of Court, rule 1410.) Inasmuch as the section 366.26 hearing was appellant's last opportunity to persuade the court to choose a less drastic alternative than termination of her parental rights, her right to attend this hearing was very compelling. Her testimony was essential for her modification hearing. The permanency planning hearing

pursuant to Welfare and Institutions Code § 366.26 was mother's last opportunity to resist the legal extinction of her motherhood with her five children. The modification hearing which concluded in January 1994 was effectively mother's last chance to seek the return of her children to her in Mexico.

The Fourteenth Amendment to the federal Constitution provides that no state shall "deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law." The California Constitution contains the same essential protection. (Art. I, sections 7 and 15.) The fundamental right to "conceive and to raise one's children" is protected by due process guarantees. (Stanley v. Illinois (1972) 405 U.S. 645, 658.) The California Supreme Court stated that "the interest of a parent in the companionship, care, custody, and management of his [her] children is a compelling one, ranked among the most basic of civil rights [citations], [and] the state, before depriving a parent of this interest, must afford him [her] adequate notice and an opportunity to be heard." (In re B. G., (1974) 11 Cal.3d 679, 688-689.)

The United States Supreme Court clarified the meaning of the due process clause as follows: "[T]he phrase expresses the requirement of 'fundamental fairness', a requirement whose meaning can be as opaque as its importance is lofty. Applying the Due Process Clause is therefore an uncertain enterprise which must discover what 'fundamental fairness' consists of in a particular situation by first considering any relevant precedents and then by assessing the several interests that are at stake." (Lassiter v. Department of Social Services (1981) 452 U.S. 18, 22-23.)

By any definition of the term, appellant was denied 'fundamental fairness' in these proceedings. Due to her exclusion from the proceedings, appellant was unable to confer with her attorney and formulate any kind of viable strategy in the case. She was unable to testify in rebuttal to any damaging assertions raised at the modification or permanency planning hearings. She was unable to raise any new evidence that would demonstrate a preferable alternative to termination of her parental rights, including the possibility that the court might exercise its discretion to place the minors in a guardianship or long term foster care or (at the modification hearing) to return the children to her custody. The exclusion of appellant from the proceedings dramatically

abridged appellant's due process right to confront and cross-examine witnesses, as her attorney's ability to undertake these tasks was rendered meaningless in her absence. (See *In re Malinda S.* (1990) 51 Cal.3d 368, 383, at fn. 16; *In re Corey A.* (1991) 227 Cal.App.3d 339, 346; Sections 311(b), 341 and 353; California Rules of Court, rule 1449(b)(3), and (b)(4).) Likewise, appellant's exclusion from the proceedings negated her ability to raise any affirmative evidence on her own behalf, and hence, precluded her from exercising her due process right to produce relevant evidence in support of her case. (See *Chambers v. Mississippi* (1973) 410 U.S. 284, 299-300.)

The fact that appellant was represented by counsel at the modification and permanency planning hearings was small consolation. Appellant's attorney was relegated to the role of objecting to the proceedings, which unfolded like scripted review hearings. He could not be assisted by appellant in cross-examining the supervising social worker nor in the presentation of evidence.

B. Due Process Conclusions and Suggested Remedy to Due Process Violation

The instant case is a far more poignant version of the deprivation of the right to present relevant evidence than *In re Amy M.* (1991) 232 Cal.App.3d 849, where this Court reversed a jurisdictional finding based on the trial court's failure to compel the testimony of a minor child whose testimony would have either substantiated or impeached the critical opinion of an psychiatric expert. This Court noted that there was no substitute for the minor's testimony which might have satisfied due process. He had not testified at a previous hearing. Nor was there any report containing his statements which could have substituted for his testimony. (*Id.*, at 865-866.)

The same conclusion must be reached in this case. There was no available substitute for appellant's testimony on the matter of the new changed circumstances that were the subject of her petition. Citing *In re B. G.*, *supra*, the California Supreme Court held, "[t]he court's actions deprived the proceedings of 'elementary fairness so as to preclude an enforceable order... .The procedure followed by the juvenile court was fundamentally defective, void from the beginning, and cannot be upheld.'" (*Id.*, at 867.)

In Amy M., this Court further held, "[i]n light of the United States Supreme Court's recent reaffirmance of the applicability of harmless error analysis to 'most constitutional errors' [citation], we conclude that analysis should be applied here....when error occurs during the presentation of a case, it can be 'quantitatively assessed' in the context of other evidence presented in order to determine whether its admission was harmless beyond a reasonable doubt." (id., at 868.)

Here, there can be no legitimate question as to whether the error was harmless.

The five children have been with Norma and Bermil, the Foster-adoptive parents, for over two and a half years. The department's evidence showed that the children were attaching to their foster parents, and on the whole adjusting well. The department, after a year and a half delay, was providing to the children the therapy they allegedly needed. In essence, the children's physical, mental and emotional needs were being met. Yet the evidence at the modification (Welfare and Institutions Code § 388) hearing showed that the three oldest children were still attached to their mother and that Zu... wanted her mother to come live with them. As siblings confide in each other, even the youngest will know that Norma and Bermil are not their natural parents and that their mother's last stated wishes to the children was to be with them.

Yet, a travesty of mother's due process of law as guaranteed by the United States (as well as California) Constitution has occurred in this dependency proceeding.

The United States Supreme Court has termed the constellation of parental interests "essential" (Meyers v. Nebraska (1923) 262 U.S. 390, 399 [67 L.Ed. 1042, 1045, 43 S.Ct. 625, 29 A.L.R. 1446]), among the "basic civil rights of man" (Skinner v. Oklahoma (1942) 316 U.S. 535, 541 [86 L.Ed. 1655, 1660, 62 S.Ct. 1110]), and "[r]ights far more precious ... than property rights" (May v. Anderson (1953) 345 U.S. 528, 533 [97 L.Ed. 1221, 1226, 73 S.Ct. 840])." Walker v. Superior Court (1988) 47 Cal.3d 112, 134-135 [763 P.2d 852; 253 Cal. Rptr. 1].

The involuntary termination of [the parent-child] relationship by state action must be viewed as a drastic remedy which should be resorted to only in extreme cases of neglect or abandonment. Stanley v. Illinois (1972) 405 U.S.

645 [31 L.Ed.2d 551, 92 S.Ct. 1208]; *Lois R. v. Superior Court* (1971) 19 Cal.App.3d 895 [97 Cal.Rptr.158]; *In re J. T.* (1974) 40 Cal.App.3d 633 [115 Cal.Rptr. 553].

It is undeniable that grave consequences flow from the permanent severance of the parent-child relationship. ... Additionally, the very essence of the [severance] proceeding is the complete and final legal termination of a relationship which is biological in nature and most personal in form." *In re Angelia P.* (1981) 28 Cal.3d 908, 916-917, [623 P.2d 198; 171 Cal.Rptr. 637].

Yet Aurelia N. was stripped of her parent-child relationship with each of her five children (and her children stripped of theirs with her) without any meaningful right of mother to be heard. This deprivation came as a result of deliberate state action - first by the Santa Clara County Department of Corrections for disobeying the trial court's order and then by the Immigration and Naturalization Service. It is a small consolation to mother which agency is the more culpable.

Mother was clearly her most material witness at the modification and permanency planning hearings. These two hearings were the most significant court proceedings in her entire life, and the life of her children. There occurred, at these two hearings, a double violation of her due process rights - as a party and as her own material witness.

In the case of *People v. Mejia* (1976) 57 Cal.App.3d 574 [129 Cal. Rptr. 192], the police conducted a probation raid on defendant Mejia's house after being told by a confidential informant that Mejia was selling drugs from his home. At the time of the raid, the police found seven adults and two children in the living room. They also found 130 kilos of marijuana in a bedroom closet as well as cash on the defendant and in the house. The police then placed everyone in the living room under arrest for possession of marijuana.

The five other adults arrested with the Mejias were not prosecuted. The three local residents were released without charges being filed, and the two Mexican nationals, Velasquez and Arce, were deported. The prosecution, however, offered to provide defendant with the witnesses' addresses in Sonora, Mexico, arguing this fulfilled their due process duty towards the defendant. It was subsequently learned that Velasquez had been convicted in Tijuana for trafficking in marijuana. Mejia

also claimed to live with his mother rather than at the address which was raided.

Defendant Mejia moved for the charges to be dismissed due to the deportation of two material witnesses. In coming to its decision that dismissal was proper due to a violation of Mejia's due process rights, the Appellate Court stated:

If, however, state action has made a material witness unavailable, dismissal is mandated by due process and a defendant's constitutional right to a fair trial. The principles involved were recently summarized by the Supreme Court in *Bellizzi v. Superior Court*, 12 Cal.3d 33, beginning at page 36 [115 Cal.Rptr. 52, 524 P.2d 148]: "The fundamental due process principle ... is that the prosecution may not deprive an accused of the opportunity to present material evidence which might prove his innocence. Even if the prosecution's motives are 'praiseworthy,' they cannot prevail when they 'inevitably result, intentionally or unintentionally, in depriving the defendant of a fair trial.' [citing *People v. Kiihoa*, 53 Cal.2d 748 (3 Cal.Rptr. 1, 349 P.2d 673)]." *People v. Mejia* (1976) 57 Cal.App.3d 574, 580-581 [129 Cal. Rptr. 192].

The *Mejia* Court also noted, "To the person whose constitutional right has been invaded, it makes little difference that the final action in bringing it about was taken by federal officers as opposed to state authorities (see *Elkins v. United States*, supra, 364 U.S. 206, 215 [4 L.Ed.2d 1669, 1676, 80 S.Ct.1437, 1442-1443])." *People v. Mejia* at 582-583.

The Court of Appeal in *Cordova v. Superior Court* (1983) 148 Cal.App.3d 177 [195 Cal.Rptr. 758] likewise ruled that if state action has made a material witness unavailable, dismissal is mandated by due process and a defendant's constitutional right to a fair trial.

The basic concept of denial of due process by the deportation of a material witness was reaffirmed in *United States v. Valenzuela-Bernal* (1982) 458 U.S. 858, 873 [73 L.Ed.2d 1193, 1206-1207, 102 S.Ct. 3440, 3449], as well as in and *People v. Valencia* (1990) 218 Cal.App.3d 808 [267 Cal.Rptr. 257].

In balancing the different interests in this matter, considering the substantial wrongs which the state agencies have inflicted on the mother and on her five children, and

considering the relationship the children have with their foster parents, the most appropriate remedy appears to be for this court to order that the orders and findings the trial court made at the July 11, 1994 permanency planning hearing be set aside. This court should find that an order terminating parental rights in circumstances such as these is unconstitutional. This Court should then direct the trial court to establish a permanent plan of guardianship or long term foster care for each of the five children, which either is in the children's best interests.

The department may argue that such a remedy makes the child pay the price of state error. That is a false argument. Guardianship or long term foster care will provide the same stability and placement as does the current termination of parental rights and plan for adoption while balancing the significant fundamental interests which are at stake. It will keep legally alive a relationship that all of the children already know of and, at least three of the children, treasure. That relationship is the biological, emotional, and spiritual connection that they have with their natural Mother.

II.

THE FEDERAL SUPREMACY CLAUSE MANDATES THAT THE SANTA CLARA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES, THE JUVENILE COURT AND THE CALIFORNIA APPELLATE COURTS HONOR THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL ON DISPUTES OF 1963 IN JUVENILE DEPENDENCY PROCEEDINGS

The Federal Supremacy Clause of the United States Constitution mandates that International Treaty entered into by the United States Government be followed by the individual states and municipalities. Article VI of the United States Constitution states:

This Constitution and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding.

Case law, some going back to the first quarter of this century, is clear in stating that the individual states and

their subdivisions must honor federal international treaty. "The relative importance to the State of its own law is not material when there is a conflict with a valid federal law. . . . [A]ny state law, however clearly within a State's acknowledged power, which interferes with or is contrary to federal law, must yield." *Free v. Bland* (1962) 369 U.S. 663, 82 S.Ct. 1089, 1092, 8 L.Ed.2d 180, 183.

Any conflict between state law and the treaties must be resolved in favor of the treaties under the command of the supremacy clause. *Asakura v. Seattle* (1924) 265 U.S. 332, 68 L.Ed. 1041, 44 S.Ct. 515.

Moreover, treaty provisions are to be liberally construed to accomplish their full purposes. *Bacardi Corp. v. Domenech*, 311 U.S. 150, 85 L.Ed. 98, 61 S.Ct. 219; *Asakura v. Seattle*, 265 U.S. 332, 68 L.Ed. 1041, 44 S.Ct. 515; *Hauenstein v. Lynham*, 100 U.S. 483, 25 L.Ed. 628; *Nielsen v. Johnson* (1928) 279 U.S. 47, 73 L.Ed. 607, 49 S.Ct. 223; *Todok v. Union State Bank* (1930) 281 U.S. 449, 74 L.Ed. 956, 50 S.Ct. 363; *Valentine v. United States* (1936) 299 U.S. 5, 81 L.Ed. 5, 57 S.Ct. 100; *United States v. Reid* (1934; CCA 9th) 73 F.2d 153 (writ of certiorari denied in (1936) 299 U.S. 544, 81 L.Ed. 400, 57 S.Ct. 29).

Even where a provision of a treaty fairly admits of two constructions, one restricting and the other enlarging rights which may be claimed under it, the more liberal interpretation is to be preferred. *Bacardi Corp. v. Domenech*, 311 U.S. 150, 163, 85 L.Ed. 98, 61 S.Ct. 219; *Shanks v. Dupont (US)* 3 Pet. 242, 249, 7 L.Ed. 666; *Hauenstein v. Lynham*, 100 U.S. 483, 25 L.Ed. 628; *Jordan v. Tashiro*, 278 U.S. 123, 127, 73 L.Ed. 214, 49 S.Ct. 47; *Nielson v. Johnson*, 279 U.S. 47, 73 L.Ed. 607, 49 S.Ct. 223; *Factor v. Laubenheimer*, 290 U.S. 276, 293, 294, 78 L.Ed. 315, 54 S.Ct. 191.

In 1969, the United States ratified and became bound by the Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol on Disputes of 1963 (herein referred to as the Vienna Convention). That Convention discussed a number of specifics concerning consular relations. Significant to this case, the Vienna Convention set forth a number of obligations of the sending state to its citizens in a host country. Those responsibilities are articulated in Article 5 and Article 37 of the Convention. Article 5 states in part:

Article 5: Consular functions

Consular functions consist in:

(a) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;

(e) helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State;

(g) safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State;

(h) safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons;

[Emphasis added]

(i) subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests;

Article 36 of the Convention states in part:

Article 36: Communication and contact with nationals of the sending State

1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

(a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;

Article 37 of the Convention states in part:

Article 37: Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, ***such authorities shall have the duty:***

(a) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred;

(b) *to inform the competent consular post without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State.* The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving State concerning such appointments;

Under California Juvenile Dependency Law, once a juvenile dependency petition is filed, the social worker becomes the guardian ad litem of the child.

The failure of the DFCS and of the juvenile court to notice the Mexican Consul in San Jose (only a few blocks from the juvenile court house) is significant. The five A. children were taken into protective custody in August 1991 and were detained at a detention hearing on August 29, 1991. Approximately two weeks later, on September 12, 1991, the investigating social worker on the case calendared the matter for a redetention hearing asking that the children be released to the custody of their father. The court, acceding to the fears of the deputy district attorney representing the children, declined to release the children. Had the Mexican Consul at that time sought the release of the children to its custody as *parens patriae* of all five if its citizen children, the outcome of this case would have been entirely different.¹⁸

Mexico has a sovereign right and duty, standing in place as *parens patriae*, analogous to that right and duty given to the states in the United States of America, and acting through its representative, the Consul of Mexico, to protect the interests of its national children and their Mexican national family members within the receiving state. *Alfred L. Snapp, etc. v. Puerto Rico ex rel Barez* (1982) 458 U.S. 592 [73 L.Ed.2d 995; 102 S.Ct 3260]; See also Vienna Convention on Consular Relations, Article 5(a), (h).

The reason that the Mexican Consul did not appear at the redetention hearing held on September 12, 1991 nor at any of the other court hearings in the matter until June 30, 1993 was due to the fact that the DFCS and the juvenile court failed to honor their obligations under the Vienna Convention. In fact, the only reason that the Consulate became aware of these proceedings was due to a plea for help from mother's counsel when it became painfully obvious that the DFCS did not intend reunification between mother and children but in fact intended to place these children for adoption. It is also significant to note that once the Mexican Government became aware of the fact that five of its citizen children were in protective custody, it continuously asked that the children be released to its custody for transport to the nation of Mexico, where the Mexican Government would assume responsibility for the custody of the children.

The very problem Congress attempted to solve with the passage of this Treaty was to preclude the activities of host nation representatives, not fully knowledgeable in the unique values of the foreign culture, from trampling on the rights of and harming foreign national children, even if intending the best for those children.

The fundamental need that state authorities honor this Vienna Convention can be better understood if we view its application to an American mother of five children who is in a Non-friendly country and arrested for a violation of the Non-friendly country's law. Almost every American would find it abhorrent (if not grounds for war) if a Non-friendly Government arbitrarily chose to ignore the mandates of the Vienna Convention and precluded contact between the American Consul and the children (as well as the mother) for a two year period. This situation would take an even more draconian form if the Nonfriendly Government attempted to terminate the mother-child relationship of the five American children under Non-friendly country's law and then attempted to have the children remain permanently in the Non-friendly country. The good intentions of Nonfriendly country would not be of much help in this hypothetical. The detaining nation would no doubt state that it was acting with the best of intentions and in the best interests of the children. That nation, however, would be using its own cultural perspective and values in making this determination and in doing so. This is exactly what has happened in this case. The difference is that Mexico is a friend and ally of the United States.

Throughout all of these proceedings, the DFCS (while personally cordial to Lic. Javier Balyon) viewed and treated the Mexican Consulate with arrogance, suspicion, distrust, disrespect and near contempt. An example of the department's attitude towards the Mexican Consulate can be seen in its failure to even acknowledge to the Mexican Consulate the existence of this case prior to July 1993. Even when the social worker was recommending to the court that the permanent plan of long term foster care be approved temporarily until the birth certificates of the children could be obtained from Mexico, the County did not notify the Mexican Consul nor did it even seek the assistance of the Mexican Consul in the procurement of these birth certificates, even though these certificates were in Mexico and difficult to locate. See Appendix P, page 5. Another example of the department's attitude towards the Mexican Consulate can be seen in its treatment of the Mexican D.I.F.'s home evaluation of Aurelia N.. Social worker Chris Peck discounted the evaluation at the Welfare and Institution Code § 388 hearing, giving it no weight. Instead, he relied on and gave value to the report of an American social worker residing in Mexico who was hired by the DFCS. He took this position despite the fact that the D.I.F. evaluation and subsequent report was prepared by a Mexican Federal agency, an integral part of the Mexican Government, and was a result of painstaking effort.

Mr. Peck's and the Santa Clara County D.F.C.S. attitude towards the Vienna Convention are made understandable and have been given an official stamp of approval by the California Supreme Court in a published decision, *In re Stephanie M.* (1994) 7 Cal.4th 295 [27 Cal.Rptr.2d 595; 867 P.2d 706]. This case is now the law in California when it comes to the Vienna Convention and juvenile dependency proceedings.

In that case, a Mexican national child was detained and placed into foster care. The grandmother, who resided in Mexico, was granted de facto parental status. The trial court thereafter denied the grandmother's motion to have the child placed with her in Mexico. The case subsequently proceeded to a permanency planning hearing pursuant to California Welfare and Institutions Code § 366.26 in which the trial court terminated the mother's parental rights and placed the child for adoption. The Appellate Court reversed the order terminating parental rights. In turn, the California Supreme Court reversed the Appellate Court.

In discussing the DFCS and the juvenile court's responsibility under the Vienna Convention, the California Supreme Court in essence held that there were no sanctions nor remedies for a state agency's or juvenile court's failure to comply with the notice requirements of the Convention. Examining Articles 5 and 37 of the Vienna Convention, the Supreme Court stated, "The Convention thus concedes the jurisdiction of a court of the receiving state to apply its laws to a foreign national, and the Convention expressly provides that the operation of the receiving state's laws is in no way dependent upon the notice prescribed by the Convention." The Court then went on, "Thus there is no merit to the contention that any delay in notice to the Mexican consulate deprived the California court of jurisdiction." In *re Stephanie M.*, *supra*, at 309-310.

Aside from citing to the Convention, that was the extent of the California Supreme Court's treatment of the requirements of notice under the Vienna Convention. The Court set forth no requirement, no guidelines, no remedy and no sanction for a department of social services to follow the mandate of this Convention. The Court did not address at all the interests that foreign nations have in their citizen children, nor in the role that such a state has as the *parens patriae* of their citizen children. Given the length of the Vienna Convention and the number of years from its inception to its ratification by the United States (six years), these concepts had to have been considered when the Convention was finally ratified. The California Supreme Court has given short-shrift to the purposes of the Vienna Convention, to the relationship that the Vienna Convention has to state juvenile dependency proceedings, and to the concept that "treaty provisions are to be liberally construed to accomplish their full purposes."

The California Supreme Court, interpreting federal law, held that California courts have jurisdiction within the State of California over minor children who are foreign nationals. Counsel for the mother in *Stephanie M.* had attempted to argue, perhaps incorrectly, that the Vienna Convention was jurisdictional in nature. If the Vienna Convention is not jurisdictional in nature, then some obligation must exist which must be fulfilled by the state agencies when the subject matter of the Convention comes into play. Otherwise, this federal treaty will be meaningless in designated state court actions, as defined by each particular state within these United States. With this as a precedent, it is frightening to think what individual states (especially

California) will do with other federal treaties in the future, the Vienna Convention acting as a precedent.

It is situations such as this which demonstrate the wisdom of the Vienna Convention. Despite the damning allegations made against mother in DFCS state court appellate briefs and in the district attorney's briefs, the fact is that the only petitions initially sustained against mother when dependency was taken was under California Welfare and Institutions Code § 300(g) , failure to provide. Mother, of course, was in custody with no blood relatives available and thus could not personally provide. It was unclear how long father was going to be able to remain out of custody.

The fact which has been completely overlooked in this matter and ignored by the DFCS, the juvenile court, the California Sixth District Appellate Court and the California Supreme Court is that the children's most significant non-blood relative was/would have been immediately available, the *parens patriae* Sovereign Nation of Mexico, if it had only been told, especially at the very beginning.

REASONS WHY THE PETITION SHOULD BE GRANTED

1. The deportation of a foreign national mother after a state has removed her five foreign national children from her custody and placed them in permanent foster homes has profound due process consequences. Mother's forced absence from the United States made it a foregone conclusion she would not be able to effectively present evidence on her own behalf in any court proceeding that adjudicated her fundamental and essential rights. These court hearings were the most significant court proceedings in her entire life, and the life of her children.

This case raises the question of the tension between the due process and equal protection clauses of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution and state action (such as deportation) designed to carry out an otherwise legitimate governmental activity.

This case further raises the question of the interrelationship of the Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol on Disputes of 1963 and California juvenile dependency proceedings. This relationship is particularly critical in this case. If the state action which prohibited mother from attending is justified, what

role does the Vienna Convention have in the protection of mother's due process rights?

If state action does not justify this significant deprivation of mother's due process of law, what are the appropriate remedies given the passage of time and interests involved in a juvenile dependency proceeding?

2. The Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol on Disputes of 1963 has been relegated to a status of nonexistence in California juvenile dependency law. Even though the Convention places mandatory requirements of notice on the receiving state (the United States) when one of the sending states' (Mexico) citizens requires a guardianship, the Santa Clara County Social Services Agency (and all the other county social service agencies in California) routinely fail to notice the local consulate of the sending state when its children citizens are taken into protective custody.

This deliberate omission has been in essence ratified by the California Supreme Court in the case of *In re Stephanie M.* (1994) 7 Cal.4th 295 [27 Cal.Rptr.2d 595; 867 P.2d 706]. The California Supreme Court, in upholding the termination of a mother's parental rights despite failure to comply with the requirements of the Convention, ruled that the Vienna Convention was not jurisdictional in nature.

The imprimatur given by the California Supreme Court in *In re Stephanie M.* and the reluctance of social service agencies to follow the guidelines of the Convention has permitted California agencies to violate the Federal Supremacy Clause and previous United States Supreme Court decisions. It has allowed California state courts to designate which federal treaties are to be honored and which are not in California juvenile dependency proceedings. *In re Stephanie M.* has effectively rendered meaningless the Vienna Convention when a county agency files a dependency petition or takes a child into protective custody.

There is no federal case which discusses the relationship of a state's juvenile dependency laws and the Vienna Convention, and only one California case, *In re Stephanie M.* cited above. With California juvenile dependency law beginning to rapidly develop, it is critical that this court clarify the relationship between the Vienna Convention, California dependency law, and a foreign nation's role as *parens patriae*

of its citizen children who are either legally or illegally in the United States.

It is additionally critical that this court examine the relationship between the convention and the protection of a mother's due process rights.

With the continuing influx of illegal immigration into California and the United States, these questions will be arising on a recurring basis.

CONCLUSION

For the reasons stated, the petition for a writ of certiorari should be granted.

Dated: September 19, 1995

Respectfully submitted,

Thomas J. Spielbauer
Deputy Public Defender
4 North Second Street, Suite 1270
San Jose, CA 95113
(408)299-7226

Counsel of Record
Attorney for Petitioner

IN THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
OCTOBER TERM, 1995

AURELIA N., Petitioner vs. SANTA CLARA COUNTY DEPARTMENT OF
SOCIAL SERVICES, Respondent

PROOF OF SERVICE

I, Thomas J. Spielbauer, have recently applied to be a member of the bar of this Court. I am a member in good standing of the State Bar of California.

I hereby certify that on September 19, 1995, I deposited copies of this Petition for a Writ of Certiorari in the Santa Clara County Interoffice Mail and addressed to:

The Honorable Leonard P. Edwards
Superior Court Judge
115 Terraine Street, Dept. 42
San Jose, CA 95113

County Counsel of Santa Clara County
Attn: Juvenile Dependency Unit
1 Almaden Boulevard, 10th Floor
San Jose, CA 95113

District Attorney of Santa Clara County
Attn: Juvenile Dependency Unit
70 West Hedding Street
San Jose, CA 95113

I further declare that on September 19, 1995, I deposited in the Santa Clara County Mail Drop for the United States Mail, to which the County of Santa Clara would add full postage prepaid, first class, copies of this Petition for a Writ of Certiorari and addressed to:

Aurelia N.
c/o Mexican Consulate
Attn: Astrid Diaz Infante
380 North First Street
San Jose, CA 95113
Astrid Diaz Infante
Third Secretary for Civil Rights

Mexican Consulate
380 North First Street
San Jose, CA 95113
Court of Appeal
Sixth Appellate District
333 West Santa Clara Street, 10th Floor
San Jose, CA 95113

Alfred Wright, Esq.
1485 Park Avenue
San Jose, CA 95113

I further certify that all parties required to be served have been served.

Thomas J. Spielbauer, Esq.
Office of the Public Defender
4 North Second Street, #1270
San Jose, CA 95113
(408) 299-7226

Counsel for Petitioner

A N E X O 2

CARTA DE MANUEL TELLO

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

MEXICO

MANUEL TELLO
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
MEXICO

Tlatelolco, D.F., a 15 de octubre de 1994.

Lic. Javier Armando Baylon Greco
Tercer Secretario
Consulado de México
San José, California.

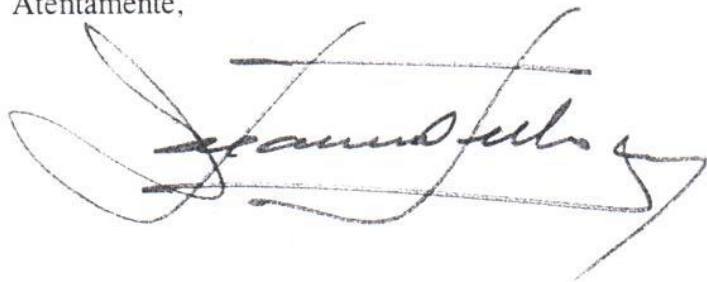
En vísperas de que concluya su nombramiento temporal en el Servicio Exterior Mexicano, deseo dirigirle estas líneas para expresarle mi profundo reconocimiento por el trabajo que ha realizado durante el tiempo en que colaboró junto con los cuadros permanentes de la diplomacia mexicana.

Sin lugar a dudas, su muy destacada colaboración como miembro de nuestra representación consular en San José, redundó en la consecución de las metas que se fijó la administración del Presidente Salinas para promover en el exterior los más altos intereses de México.

Por otra parte, quiero subrayar que el Servicio Exterior necesita contar con los mexicanos más competentes y mejor capacitados, por lo que lo invito, de la manera más amistosa, a contemplar la posibilidad de integrarse al cuerpo de carrera cuando se convoque el próximo concurso público de ingreso al Servicio. Esta sería la mejor forma de no desperdiciar su talento, así como la experiencia adquirida durante el tiempo que ha estado comisionado en el exterior y de avanzar en la profesionalización de los miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Al agradecer nuevamente a usted su colaboración en favor del quehacer internacional de México, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Manuel Tello', is written over a horizontal line. The signature is fluid and stylized, with a large loop at the end.

A N E X O 3

CARTA DE THOMAS J. SPIELBAUER

DEPUTY PUBLIC DEFENDER,

COUNTY OF SANTA CLARA, SAN JOSE , CA., EUA

County of Santa Clara

Law Offices
Office of the Public Defender
County Government Center, West Wing
70 West Hedding Street
San Jose, California 95110
408) 299-7700 FAX 998-8265

OFFICE OF THE PUBLIC DEFENDER
HORIZON CENTER
4 NORTH SECOND STREET
SAN JOSE, CA 95113



NORWOOD A. NEDOM

Stuart R. Rappaport
Public Defender

November 10, 1994

The Honorable Manuel Tello
Secretario Del Ramo
Mexico, D.F.
Mexico
Fax: 011-525-583-9023

Dear Mr. Tello,

I was recently saddened to hear that Dr. Javier Baylon may be recalled to Mexico. I am, as a result, writing you this letter to recommend that Dr. Baylon remain at his post at the San Jose, California consulate.

Dr. Baylon has been instrumental in securing for Mexico the recognition and respect of the Juvenile Court of the State of California in matters dealing with Mexican citizens. He has earned for Mexico a trust and respect which previously had not been accorded to the Nation of Mexico nor to its consul. It would be indeed a tragedy if Dr. Baylon were to return to his country and not allowed to see through the culmination of a process he was essential in initiating.

I am a Deputy Public Defender for the County of Santa Clara, California and have been practicing in the area of juvenile dependency law for the last six-seven years. While my father was an immigrant from Germany, my mother was and still remains a Mexican citizen. I additionally have been the President of La Raza Lawyers Association, the local (1987 and 1988) and the California State (1990) organizations.

Throughout much of my practice of law, few attorneys were aware of the presence of the Mexican consulate, and hardly any were aware of the treaty obligations of the Geneva Convention on Consular Relations of 1964. Most thought of the consulate as a place to get a visa to visit Mexico and where many Mexicans go to while here to arrange their affairs. Most did not even know where the consulate was located. That has changed.

cc: Assistant Public Defender: Norwood A. Nedom
Assistant Public Defender: Grant M. Armstrong, Ronald A. Normann



I have had the pleasure of working with Dr. Baylon in several cases, the most notable of which was the Aurelia N. case. That case involved the state removing five children from their mother. Four of the five children were born in Mexico and are Mexican citizens. The mother, now in Mexico, is likewise a Mexican citizen.

That case, the participation of Dr. Baylon, and his subsequent court appearances and involvement, established a unprecedented presence and respect for the Country of Mexico in the Superior Courts of Santa Clara County. As a result of Dr. Baylon's direct activities, the Santa Clara County Department of Social Services, now at times begrudgingly, has begun to extend to Mexico the honor and respect that it deserves. That department now looks to the San Jose, California consulate as an essential resource when Mexican children in the United States are caught up in the dependency process. The fact that a week ago Hispanic social workers openly criticized their very own Department in a public hearing for failure to give full faith and credit to the Mexican D.I.F. and the courts of Mexico is an indication of the influence that Dr. Baylon has had.

Perhaps even more significantly, the Juvenile Court judges now warmly welcome Dr. Baylon into their courtrooms as a trusted, cordial and effective representative of the Nation of Mexico.

Dr. Baylon's departure will be a great loss since the process of recognition has only commenced. While Dr. Baylon's actions have brought change, more needs to be accomplished.

Dr. Baylon, through the consulate, is effecting a very positive presence of the Mexican Government as guardian of its citizens in the United States. I anticipate that next year, the California legislature will be passing legislation mandating formal noticing to the local consulates and permitting participation of the consulate when foreign-national children are taken into protective custody. This probably would not even be under consideration had I not had the opportunity of working so closely and continuously with Dr. Baylon.

You have an excellent representative of the Nation of Mexico in Dr. Javier Baylon. It will be a very sad day, certainly for me as a person has advocated for Mexico and frequently argued for its citizens in court, if Dr. Baylon were to be so prematurely recalled to Mexico. It will be as if a much needed ally were removed from the field of battle when significant and well-deserved advances were about to occur.

I ask that you reconsider the recall of Dr. Baylon.

Truly yours,



Thomas J. Spielbauer
Deputy Public Defender

A N E X O 4

**OFICIO DEL ASSOCIATE CHIEF OF PROTOCOL
OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON, D.C.**



United States Department of State
Washington, D. C. 20520

AUGUST 5, 1993

EMBASSY OF MEXICO
1911 PENNSYLVANIA AVENUE NW
WASHINGTON, DC 20006

NAME: BAYLON GRECCO, JAVIER ARMANDO
PID NO: 3062-0660
TITLE: CONSUL
DUTY OFFICE: CONSULATE
LOCATION: SAN JOSE, CA

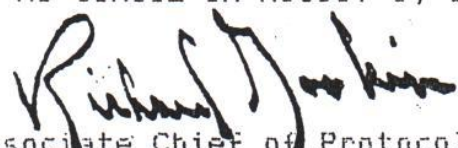
The Department of State acknowledges receipt of form DS-394 submitted by the Embassy requesting that the above-mentioned person be recognized with the consular title indicated.

Pursuant to the Embassy's submission, recognition is accorded to the above-mentioned person as a consular officer at the designated consulate.

In this capacity he/she will be accorded the following immunities:

In accordance with Article 43 of the Vienna Convention on Consular Relations, consular officers shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions except as provided in paragraph 2 of that article. Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority, in accordance with Article 41 of the Convention.

MR. BAYLON GRECCO HAS BEEN RECOGNIZED AS CONSUL ON AUGUST 3, 1993.


Associate Chief of Protocol

A N E X O 5

CORREOGRAMA NO. 003357, DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1993

EMITIDO POR LA EMBAJADA DE MEXICO,

RECONOCIENDO AL LIC. JAVIER ARMANDO BAYLÓN GRECCO,

COMO CONSUL EN SAN JOSE CALIFORNIA

Embajada de México

CORREOGRAMA

PRIORITY MAIL

No: 003357

Exp:73-0/131/2100

Washington, D.C., a 6 de agosto de 1993.

CONSULMEX
SAN JOSE, CALIFORNIA

COMUNIQUE DEPARTAMENTO ESTADO EN NOTA ADJUNTASE
PRESENTE INFORMO EMBAJADA HASE RECONOCIDO C. JAVIER
ARMANDO BAYLON GRECO COMO CONSUL ESA REPRESENTACION.
RUEGOLE OBSERVAR ULTIMO PARRAFO QUE CONFORMIDAD ARTICULO
43, PARRAFO 1, CONVENCION VIENA RELACIONES CONSULARES, Y
SUJETO A CONDICIONES ESTABLECIDAS PARRAFO 2 CITADO ARTICULO,
AGENTES CONSULARES NO ESTARAN SOMETIDOS A JURISDICCION
AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS ESTADO RECEPTOR
POR ACTOS EJECUTADOS EJERCICIO FUNCIONES CONSULARES.
ASIMISMO, SE ANEXA TARJETA IDENTIFICACION NUMERO 3062-0660-51.

p.o. Mr. Elena Castillo
MONTAÑO

Despáchese:

MEC/OAD

FUENTES DE INFORMACION

FUENTES DE INFORMACION

California Juvenile Laws and Rules. Editorial West Group, Edición 2001.

Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Editorial Commission on the Bicentennial of the United States Constitution. Washington, D.C. 1991.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agenda de Amparo 2005. Editorial ISEF. México 2005.

Convención de Viena sobre Asuntos Consulares. Viena, [en línea].24 de abril de 1963. http://spin.com.mx/~dhjoseph/docum/viena_e.html

Guía para los Padres. Agencia de Servicios Sociales, Condado de Santa Clara. 2004.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Leyes y Códigos de México. Editorial Porrúa, México 2004.

Ley del Servicio Exterior Mexicano. Secretaría de Relaciones Exteriores. Primera Edición. México 1994.

N. Aurelia. Petition for Writ of Certiorari, [en línea]. octubre 1995. Suprema Corte de los Estados Unidos. <http://spielbauer.com>

Santa Clara County, Oficina de Defensores Públicos, [en línea] 2004. p.1.
<http://www.jimbeall.org/links/links.html>

Santa Clara County, Oficina del Fiscal de Distrito, [en línea]. 2004. p.1.
<http://www.jimbeall.org/links/links.html>

Stein Theodore J. Child Welfare and the Law. Ed. Cwla Press, 2ª Ed. Washington, D.C. 1998.

Webster's New World Dictionary of the American Language. Ed. Popular Library. New York. 1974.